

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

continuar con su conducta contraria a la Constitución, procediendo a montar un escenario a través del cual pudiese imputar la responsabilidad de tres secuestros a

Pues bien, esta escenificación ajena a la realidad –que se sucedió a partir de la violación a la asistencia consular y a la puesta sin demora– tiene repercusiones directas e inmediatas en la violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia.

A continuación dotaremos de contenido a este derecho fundamental, a fin de dar respuesta a los agravios del recurrente y determinar la violación del derecho en el caso concreto. Una vez realizado este ejercicio, será necesario demostrar que las diversas violaciones sufridas por la recurrente tuvieron un efecto devastador en el proceso. Conclusión contraria a la establecida por el Tribunal Colegiado de Circuito a lo largo y ancho de su Sentencia, en el sentido de que *la actuación de la policía nunca fue tomada en cuenta para acreditar la responsabilidad de la recurrente*.



5. El derecho fundamental a la presunción de inocencia.

El reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comporta un cambio esencial en la naturaleza de esta regla básica de la ordenación de un proceso penal. Una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial (*in dubio pro reo*) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata³⁰³.

³⁰³ Véanse las tesis aisladas: P.XXXV/2002 de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 'EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL' y I/2012 (10ª) de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008".

Así las cosas, la presunción de inocencia, además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental.

En esta lógica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la presunción de inocencia en su artículo 8.2, el cual establece lo siguiente:

8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. (...).

La Corte Interamericana ha destacado la importancia del derecho a la presunción de inocencia al señalarlo como un fundamento de las garantías judiciales³⁰⁴, según el cual las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se acredite plenamente su culpabilidad³⁰⁵.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que “el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el *onus probandi* corresponde a quien acusa”³⁰⁶.

Así las cosas, a través de la consagración de este principio se entiende que la eficacia del proceso penal deriva ahora de su carácter de medio civilizado de persecución y represión de la delincuencia. Civilizado

304 Corte IDH. Caso *vs. Ecuador. Fondo*. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77; Caso *vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153; Caso *vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 145; y Caso *vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 182.

305 Corte IDH. Caso *vs. Ecuador. Fondo*, párr. 77; y Caso *vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*, párr. 153; y Caso *vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*, párr. 182.

306 Caso *vs. Ecuador. Fondo*, párr. 154 y Caso *vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*, párrs. 182 y 183.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

en tanto respeta los derechos fundamentales de los individuos, lo que convierte al proceso penal en un **proceso con todas las garantías**, lo cual es la aspiración del constituyente al establecer todos los derechos de defensa.

La naturaleza y alcances del derecho fundamental a la presunción de inocencia determinan una configuración compleja en su contenido, pues influyen con notoria eficacia tanto en el tratamiento que debe darse al imputado antes y durante el desarrollo del procedimiento, como en la actividad probatoria que se practique con el objeto de demostrar su culpabilidad, sin dejar de lado su singular trascendencia en el contexto general de todo el proceso penal. Así, de la presunción de inocencia es posible predicar que tiene, básicamente, un triple significado: **como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso**³⁰⁷.



Las vertientes más estudiadas de la presunción de inocencia son las que se refieren a su cualidad de **regla probatoria y de estándar probatorio o regla de juicio que debe ser aplicada en el momento de dictar sentencia**.

La presunción de inocencia como **regla probatoria** es un derecho que establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que deben reunir los medios de prueba para poder considerar que existe **prueba de cargo válida** y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado. En consecuencia, no cualquier prueba puede enervar la presunción de inocencia, sino que ésta debe practicarse de acuerdo con ciertas garantías y de una determinada forma para cumplir con esa finalidad. En esta línea, deben existir pruebas que puedan entenderse de cargo, es decir, pruebas sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, y que hayan sido suministradas por el

³⁰⁷ Al resolver el amparo directo en revisión 517/2011, esta Primera Sala ya anunciaba que la presunción de inocencia es un derecho que podría calificarse de poliédrico, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con garantías encaminadas a disciplinar distintos aspectos del proceso penal.

Ministerio Público con respeto a los principios y garantías constitucionales que rigen su práctica. Así, puede decirse que este derecho entra en juego en un momento anterior a la valoración de las pruebas, cuando el juez examina si las pruebas presentadas por la acusación pueden considerarse válidamente como pruebas de cargo.

Por otro lado, la presunción de inocencia como **regla de juicio o estándar probatorio** puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpadados cuando durante el proceso no se han aportado **pruebas de cargo suficientes** para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (*la prueba entendida como actividad*), sino al momento de la valoración de la prueba (*entendida como resultado de la actividad probatoria*). Al resolver el amparo directo en revisión ³⁰⁸, esta Primera Sala estableció que para poder considerar que existen indicios que constituyan prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe, entre otras cosas, cerciorarse al valorar el material probatorio disponible de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

En esta lógica, es importante señalar que la valoración de la prueba es, en principio, una facultad exclusiva de los tribunales ordinarios. Sin embargo, existen ocasiones en las que los jueces y tribunales de amparo deberán examinar la actividad probatoria desarrollada en el proceso ante el tribunal ordinario, para determinar si la misma tiene el valor jurídico necesario para contrarrestar la presunción de inocencia. No se trata de que el tribunal de amparo sustituya la interpretación de los hechos realizada por el tribunal ordinario por entenderla más correcta o más adecuada, sino que, por el contrario, sólo ha de extenderse a aquellos supuestos en los que la

³⁰⁸ Ministra Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Resuelto el 29 de junio de 2011.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

resolución judicial pueda poner en riesgo la vigencia de un derecho fundamental apoyándose en una indebida valoración de las pruebas.

Pues bien, existe otra vertiente de la presunción de inocencia que ha sido menos estudiada y que en nuestro caso reviste una importancia capital: la presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal.

Esta faceta de la presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas³⁰⁹.

Asimismo, y a diferencia de lo que sucede con la regla de juicio, la violación a esta vertiente de la presunción de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales.

Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad

³⁰⁹ La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre esta cuestión en el amparo en revisión 1/2007, resuelto el 21 de marzo de 2007, del cual derivó la tesis aislada de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL". Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado extensamente este tema. En este sentido, véanse los casos: vs. *España*, sentencia de 28 de junio de 2011; vs. *Austria*, sentencia de 19 de diciembre de 1989; vs. *Francia*, sentencia de 10 de febrero de 1995; vs. *Rumanía*, sentencia de 30 de junio de 2009; y vs. *Francia*, sentencia de 13 de septiembre de 2007.

que corresponde al proceso como tal, se ha desplazado a la imputación pública realizada por la policía.

Además, la violación a la presunción de inocencia como regla de trato puede afectar de una forma –intraprocesal– mucho más grave aún los derechos relativos a la defensa del acusado. Puede introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa.

Así, la presunción de inocencia se relaciona tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona, como con la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio.

La violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir en un proceso judicial cuando la **manipulación de la realidad por parte de la policía** tiende a referirse a: (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier opinión sobre la culpabilidad del detenido; y (v) el hecho de que alguien hubiera identificado al detenido, entre muchas otras.

Así, en este tipo de escenarios resulta que el “verdadero juicio” se celebró mucho antes de la aparición del juez. En las situaciones a las que nos estamos refiriendo la policía no pretende facilitar información de la causa que se tramita ante los tribunales, sino anticipar o reproducir su desarrollo, pero sin cumplir con las garantías del debido proceso.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Esta misma lógica ha sido sostenida por la Corte Interamericana, la cual estableció en el Caso *Vs. México* que "el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acusa"³¹⁰.

Es importante señalar que el respeto de las autoridades policiales y ministeriales a la regla que venimos desarrollando se encuentra exigido en nuestro ordenamiento jurídico, no solo en virtud del derecho a la presunción de inocencia sino también por lo establecido en el artículo 21 constitucional.

Como acertadamente señala la recurrente en su agravio primero y sexto agravio, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de buena fe ministerial, al establecer que: "*la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución*".

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DE ACUERDOS
CON LA SALA IV

Resulta indudable que con la inclusión de este apartado en el artículo 21 constitucional, el constituyente tuvo por objetivo establecer un estándar constitucional relativo a la actuación de los policías: la legalidad, la honestidad, la eficiencia y el cumplimiento de las normas de derechos fundamentales³¹¹.

Como ya lo ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad pública va de la mano, necesariamente, del respeto al orden constitucional. En esta lógica, "resulta inadmisiblemente constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo

³¹⁰ Caso , párr. 184.

³¹¹ Exposición de motivos de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.

social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo”³¹².

A continuación, deberemos proceder a determinar si, en el caso concreto, la recurrente sufrió la violación a su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

6. La actualización de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Como fue reseñado en la primera parte del estudio de fondo de esta sentencia, las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, fueron las causas que permitieron, favorecieron y prepararon el terreno para que la autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad.

Esta escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir unos hechos ajenos a la realidad, que implicaron –sin ánimo ser exhaustivos– los siguientes puntos:

1. La transmisión de un operativo policial de rescate de las víctimas de un secuestro que se estaba realizando en esos momentos.

³¹² Tesis jurisprudencial P.J.35/2000, cuyo rubro es: “SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES”. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época. Tomo XI, abril de 2000, página 557.

En el mismo sentido se pronunció el **Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas**, en su Observación General N° 32, donde, al estudiar el contenido del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, señaló que el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia implica que “**todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado**”. Véase: Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Observación General N° 32, U.N. Doc. CCPR/C/GC32 de 27 de agosto de 2007, párr. 30, citando el precedente establecido en la Comunicación N° 770/1997, *Gridin c. la Federación de Rusia*, párrafos 3.5 y 8.3.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

2. La detención, en ese mismo lugar, de _____ y de otro individuo, los cuales supuestamente se encontraban relacionados con los hechos.
3. El interrogatorio, en ese mismo lugar, a _____ y a otro individuo por parte de los medios de comunicación que habían sido invitados a transmitir la escenificación. Dicho interrogatorio fue permitido y favorecido por los miembros de la Agencia Federal de Investigación.
4. Las declaraciones, por parte de la autoridad, en el sentido de que _____ era parte de una banda de secuestradores.
5. Las declaraciones, por parte de de la autoridad, de que _____ y otro individuo habían sido identificados por las víctimas como sus captores.
6. Las declaraciones, por parte de los miembros de los medios de comunicación presentes en ese momento, de que _____ y otro individuo habían sido identificados por las víctimas como sus captores.
7. La identificación de los nombres, edad y nacionalidad de _____ y de otro individuo, por parte de la autoridad y de los medios de comunicación.
8. La declaración simultánea de las víctimas del supuesto delito.
9. La exposición de estas imágenes, desde ese momento y hasta nuestros días, por parte de la autoridad y de los medios de comunicación, asumiendo, indubitadamente, que _____ y otro individuo resultaban los responsables de los hechos investigados.

Pues bien, frente a esta situación, el Tribunal Colegiado de Circuito se limitó a señalar en su sentencia que no existía violación alguna ya que *"la presunción de inocencia (se garantiza) frente a tribunales constitucionalmente instituidos y no frente a la opinión pública (...)*.

Asimismo, que en la lógica del recurrente, *“se debería absolver a todo aquél que sea fotografiado en el momento de la detención”*, lo que a juicio del Tribunal Colegiado es *“sencillamente absurdo”* (...) ³¹³.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no comparte estos razonamientos, por lo que procede a revocar la sentencia y a declarar la violación del derecho fundamental en estudio, con base en lo siguiente:

Como lo señalamos anteriormente, de la presunción de inocencia es posible predicar que tiene, básicamente, un triple significado: **como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio en el proceso o estándar de prueba.**

Como regla de tratamiento, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, **desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso que ciertas actuaciones de los órganos del Estado – sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha– incidan negativamente en dicho tratamiento.**

Así las cosas, el Tribunal Colegiado de Circuito desconoce que la presunción de inocencia determina una configuración compleja en su contenido y que, en los términos desarrollados en esta sentencia, no se ve limitada al actuar de los jueces.

Asimismo, el Tribunal Colegiado pretende señalar que frente a la “opinión pública” no es exigible la presunción de inocencia.

En este punto resulta fundamental señalar que no es la “opinión pública” o los medios de comunicación a los que se les debe imputar la


³¹³ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 983 y 983 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

escenificación ajena a la realidad y el trato anticipado de culpable respecto a la recurrente.

No fueron los medios de comunicación quienes detuvieron a y no la pusieron a disposición inmediata del Ministerio Público, ni fueron ellos quienes le negaron su asistencia consular y la trasladaron a . Fue la autoridad.

Fueron los agentes y responsables de la Agencia Federal de Investigación quienes organizaron y prepararon un montaje a efectos de publicitarlo en las principales cadenas de televisión en México. Como quedó reseñado en los antecedentes de esta sentencia, el máximo responsable de esta Agencia reconoció este hecho en una conferencia de prensa, meses después³¹⁴.


Esta Primera Sala no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo.

fue expuesta repetidamente y en profundidad a un espectáculo que resulta inadmisibles en un sistema democrático de derechos y libertades. Nadie que hubiese visto la televisión ese día y durante los meses siguientes, podría negar que tal espectáculo fue, para los miles y miles de ciudadanos que lo vieron y oyeron, el auténtico juicio de Cualquier proceso judicial realizado después, en la que víctimas y testigos fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una mera formalidad.

³¹⁴ En este sentido, resulta irrelevante si la planeación y ejecución de la escenificación ajena a la realidad fue perpetrada por los miembros de la Agencia Federal de Investigación que realizaron materialmente la detención, por sus altos mandos o por ambos. Lo cierto es que hubo un concierto de agentes de la autoridad que, a través de acciones complejas, manipularon la realidad.

Así las cosas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en el caso concreto, **existe una violación al derecho fundamental de la recurrente a la presunción de inocencia como regla de trato y, como se verá a continuación, también como regla probatoria que disciplina los requisitos que han de cumplir las pruebas de cargo para considerarse válidas.**

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha condenado enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme³¹⁵. Al respecto, dicho tribunal sostuvo que “el derecho a la presunción de inocencia (...) exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita (un) juicio ante la sociedad (que) contribuy(a) así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”³¹⁶.

Sin embargo, falta determinar qué efectos tuvo en el proceso la violación que acabamos de declarar. Cuestión capital, ya que uno de los argumentos centrales del Tribunal Colegiado de Circuito, repetido de forma constante, es que la actuación de la policía no tuvo reflejo en la determinación de la responsabilidad de

7. Los efectos de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental a la presunción de inocencia.

A juicio de esta Primera Sala, la violación a la presunción de inocencia –derivada a su vez de las violaciones al derecho a la asistencia consular y a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público–,

³¹⁵ Corte IDH. Caso *Vs. Perú. Fondo*. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 46 inciso d en relación con la sentencia de *Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 123; Caso *Vs. Perú. Fondo*. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 63.i, 85 y 106; y Caso *Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párrs. 158, 160 y 161.

³¹⁶ Corte IDH. Caso *párr. 160*.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

generaron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de la recurrente.

Antes del entrar al análisis de **efecto corruptor** en el caso concreto, es necesario señalar que esta Primera Sala entiende por tal efecto a las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria, en los términos que se explican a continuación³¹⁷.

Asimismo, para que la conducta de la autoridad produzca un efecto corruptor del material probatorio es necesario que su actuar sea indebido, es decir, que sea efectuado fuera de todo cauce constitucional y legal.

El material probatorio afectado por el efecto corruptor provoca su falta de fiabilidad, situación que impacta los derechos de la persona acusada, ya que es indudable que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho que tiene toda persona a que, en caso de ser condenada, su condena no tenga como base evidencia de cuestionable fiabilidad, especialmente cuando ésta es imputable a la actuación ilegal de la autoridad. Así, cuando la falta de fiabilidad en el material probatorio sea una consecuencia de la arbitrariedad de las autoridades, las cuales no hubiesen tutelado efectivamente los derechos fundamentales de los inculpados en la búsqueda de la verdad, **indefectiblemente se producirá un efecto corruptor sobre todo el procedimiento, viciando tanto al procedimiento en sí mismo como a sus resultados**³¹⁸.

³¹⁷ Un concepto semejante ha sido utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Véanse las siguientes sentencias de la de la Corte Suprema de Estados Unidos: *United* (1967),

³¹⁸ Como lo sostuvo esta Primera Sala en la sentencia recaída a solicitud de facultad de atracción 7/2011, resuelta en sesión de 11 de mayo de 2011, la doctrina ha distinguido dos modelos del derecho procesal penal: el modelo garantista (que corresponde con el derecho penal mínimo) y el modelo decisionista (que corresponde con el derecho penal máximo). El modelo garantista se

Ahora bien, esta Primera Sala considera que claramente se observa un efecto corruptor en el presente caso como consecuencia de la conducta indebida y arbitraria de los miembros de la Agencia Federal de Investigación al exponer a la quejosa ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros. Lo anterior, como se expondrá a continuación, tuvo repercusiones claramente identificables en el proceso, las cuales perjudicaron indudablemente a la quejosa.

Las consecuencias de la escenificación comprendieron la exposición de una persona, en este caso a la quejosa, señalándola como la responsable de un delito, sin que mediara un juicio que esclareciera su situación jurídica, además de una supuesta recreación de **hechos que nunca ocurrieron** pero que, sin duda, pretendieron causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso.

En el mismo orden de ideas, el hecho de que las autoridades orquestaran un montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el proceso porque, además de que la sociedad entera fue sugestionada, también lo fueron las personas involucradas en el proceso, viciándose la fiabilidad de sus declaraciones. Esta situación resulta inadmisiblemente peligrosa en un estado democrático de derecho, pues la probabilidad de ocasionar una identificación errónea e irreparable en contra de la quejosa estuvo latente desde ese momento. Este peligro aumentó considerablemente, cuando, como se ha establecido en la presente sentencia, la escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir hechos

orienta a la averiguación de una verdad procesal empíricamente controlable y controlada, limitada por el principio de taxatividad; asimismo, las garantías procesales circundan la averiguación de la verdad procesal a través de cánones como la presunción de inocencia, la carga de la prueba de la acusación, el principio *in dubio pro reo*, la publicidad del procedimiento probatorio, el principio de contradicción y el derecho de defensa mediante la refutación de la acusación. Por el contrario, el modelo decisionista apunta a la búsqueda de la verdad fundada esencialmente en valoraciones y en averiguaciones de "verdades" políticas que van más allá de la prueba, perseguidas sin límite normativo en cuanto a los medios de adquisición de las pruebas y al mismo tiempo no vinculada sino discrecional, aunque sólo fuera porque la indeterminación y el carácter valorativo de las hipótesis acusatorias reclaman, más que pruebas, juicios de valor no refutables por la defensa. En este modelo, el fin (la obtención de la verdad sea cual fuere) justifica los medios. Ministro Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

ajenos a la realidad, situación que produjo, desde un inicio, la manipulación de las circunstancias y hechos que constituyen el objeto de la investigación.

Así las cosas, y como fue extensamente expuesto en los antecedentes de esta sentencia, los tribunales que han juzgado este caso **tuvieron como pruebas de cargo**, a fin de tener por acreditada la responsabilidad de en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, **las referidas a los testimonios de las tres víctimas y el de un tercero**³¹⁹.

Empezando por el último testigo, de nombre resulta claro el **efecto corruptor** que la escenificación ajena a la realidad tuvo en su testimonio, ya que **el mismo día** que las autoridades admitieron que las imágenes mostraban un montaje, y 5 días después de que esa información saliera a la luz pública, este testigo compareció voluntariamente ante el Ministerio Público a declarar que identificaba a la recurrente como una de las secuestradoras en virtud de lo que había visto en la **televisión**³²⁰.

Respecto a la declaración de la víctima menor de edad, de nombre es importante partir del hecho de que a pesar de haber estado presente en la escenificación ajena a la realidad, **ese mismo día** –ante el agente del Ministerio Público– **declaró que no reconocía a físicamente ni por su voz** (una vez que esta le fue expuesta en la *Cámara de Gesell*)³²¹. Sin embargo, 67 días después del día del operativo, y solo 9 después de que saliera a la luz pública el hecho de

³¹⁹ Véase el apartado IV de esta sentencia así como la foja 857 vuelta y 858 de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito.

³²⁰ *Supra* apartado II.4.E. Este testigo señaló exactamente que: "*reconozco plenamente sin temor a equivocarme a la persona que aparece en la fotografía, como la misma persona que en ocasiones iba a mi puesto a comprar verdura, la cual siempre lo hacía cuando llegaba la señora*... así mismo (sic) de (sic) trata de **la misma persona que vi en la televisión como la secuestradora** (...)" (Cuaderno de primera instancia. Tomo III. Declaración de

Fojas 321 a 323). El 1º de marzo de 2006 acudió a las instalaciones de la SIEDO, para rendir su **segunda declaración**, y reconoció a en la *Cámara de Gesell* (Cuaderno de primera instancia [2006-IV]. Tomo III. Declaración de Fojas 476 y 477). El testigo falleció el 21 de mayo de 2006 y, consecuentemente, no compareció ante la Juez de Distrito.

³²¹ *Supra* apartado II.4.A. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Comparecencia del menor de edad (Fojas 238 a 242.

que los videos difundidos constituían un montaje y que las imágenes volvieron a salir a la palestra, **declaró que identificaba la voz de como la de una mujer que tenía un acento raro y extranjero y que le había inyectado durante su cautiverio**³²².

Una situación similar sucede con madre del anterior testigo, la cual, a pesar de haber estado presente en la escenificación ajena a la realidad, **ese mismo día –ante el agente del Ministerio Público– declaró que no reconocía a como una de sus secuestradores**, indicando que la diligencia de reconocimiento era la primera vez que la veía y que su voz no coincidía con la de los secuestradores. Finalmente, agregó que los oficiales de la Agencia Federal de Investigación le informaron que **había participado en su secuestro**³²³. Sin embargo, 61 días después del día del operativo y solo 3 después de que saliera a la luz pública el hecho de que los videos difundidos constituían un montaje y que las imágenes volvieron a salir a la palestra, **declaró que su hijo le comentó que una mujer con acento raro fue quien le sacó sangre**³²⁴. Siete días después, compareció nuevamente a declarar y **en esta ocasión describió que su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya voz, según la reconocieron en los noticieros, es la de** Consecuentemente, **identificó a la quejosa como la mujer que escuchó en las dos casas de seguridad**³²⁵.

³²² Segunda declaración de (14 de febrero de 2006). *Supra* apartado II.4.E. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Ampliación de declaración de Fojas 370 a 375. El 7 de junio de 2006, compareció por tercera vez a declarar (175 días después del operativo) y **agregó la descripción del diálogo sostenido con , señalando que ella le había pedido que “apretara el puño”** (Cuaderno de primera instancia [/2006-IV]. Tomo IX. Videoconferencia de Fojas 664 vuelta a 667 vuelta).

³²³ *Supra* apartado II.4.A. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de a las 14:00 p.m. Foja 256 a 259.

³²⁴ Segunda declaración de (8 de febrero de 2006). *Supra* apartado II.4.E. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Comparecencia de Reconocimiento de Inmueble por parte de Fojas 294 a 296.

³²⁵ Tercera declaración de (15 de febrero de 2006). *Supra* apartado II.4.E. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Ampliación de declaración de Fojas 379 a 386. Casi cuatro meses después de su tercera declaración, compareció una vez más a declarar, esta vez ante la Juez de Distrito, y en su narración **explicó cómo pudo percatarse de la complexión física y color de cabello de , a quien reconoció como la mujer que había visto en la casa de seguridad**. Véase cuaderno de

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Es importante advertir que esta Primera Sala no se pronuncia sobre la credibilidad o no de los testigos antes citados. **Lo relevante, a nuestros efectos, es que la escenificación ajena a realidad resulta un elemento que –derivado de sus propios testimonios– resta indudablemente de fiabilidad a sus testimonios.** Esto es así ya que la exposición al montaje, como personajes y posteriormente como los principales espectadores, predispone a estos individuos para enjuiciar la realidad a través del “filtro” creado por los miembros de la Agencia Federal de Investigación. Asimismo, y esto resulta aplicable para todos los testigos, esta Primera Sala no soslaya la posibilidad de que las personas que han sufrido experiencias traumáticas recuerden los hechos ocurridos durante las mismas con el paso del tiempo. Sin embargo, en el presente caso la situación es distinta, ya que **ese proceso de recuerdo se vio indudablemente contaminado –consciente o inconscientemente– por el hecho de que las autoridades crearan una realidad alternativa en detrimento de la acusada.**

Por último, en lo que hace a la víctima de nombre [REDACTED] es importante recordar que **fue entrevistado en el mismo lugar de los hechos hasta en cuatro ocasiones distintas por los medios de comunicación presentes en [REDACTED]. Según se desprende de esos testimonios, reconoció como uno de sus captores al individuo que acompañaba a la recurrente, pero no a**

³²⁶. Una vez que fue trasladado a las dependencias del Ministerio Público, [REDACTED] declaró que reconocía [REDACTED] como parte de los secuestradores, en virtud de su acento de origen [REDACTED] y del color de su cabello³²⁷. Ese mismo día, por la noche, dio una entrevista en

primera instancia (/2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de a 663 vuelta.

Fojas 657 vuelta a 660

³²⁶ *Supra* apartado I, fojas 1 a 21.

³²⁷ *Supra* apartado II.4.A. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de a las 14:00. Foja 248 a 255.

exclusiva para un noticiero televisivo en la que ya no solo la reconoce, si no que le otorga uno de los principales roles dentro de sus secuestradores³²⁸.

Respecto a este testigo, es necesario señalar que fue uno de los personajes más activos en la escenificación ajena a la realidad, ya que se vio sometido al "filtro" creado por la autoridad desde un inicio, en un escenario en el cual la ahora recurrente era señalada hasta la saciedad como la culpable. Esta situación produce una falta de fiabilidad en su testimonio, ya que la deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación lo transformó involuntariamente en uno de los actores, provocando condiciones sugestivas de tal calado que resulta imposible considerar a su declaración como una prueba de cargo respetuosa con la presunción de inocencia de la ahora recurrente.

En consecuencia, no es que dichas pruebas resulten insuficientes para condenar a la quejosa, lo que supondría una contravención a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio o estándar de prueba. La violación tiene lugar en dos momentos anteriores a la valoración de las pruebas: por un lado, cuando la autoridad actúa violentando los principios constitucionales que rigen su actuación, dando lugar a su comportamiento a la existencia de circunstancias sugestivas que afectan la fiabilidad de las pruebas, especialmente de las identificaciones, que generan un efecto corruptor en el material probatorio; y posteriormente, cuando se utiliza como prueba de cargo testimonios viciados por ese efecto corruptor.

Por último, es necesario referirnos al **parte informativo** en el cual se da cuenta de la detención de la recurrente, ya que ésta es la prueba de cargo relativa a los delitos de posesión y portación de armas de fuego de

³²⁸ *Supra* apartado I, fojas 25 y 26. compareció en diferentes ocasiones para ampliar su declaración ministerial original. En dichas comparecencias: (i) **aportó datos sobre la identificación de otros presuntos inculcados en su secuestro, más no así sobre** (segunda declaración: Cuaderno de primera instancia [2006-IV]. Tomo IV. Segunda declaración de Fojas 231 a 234); y (ii) **repitió la información que dio en su primera declaración sobre el cabello de y la forma en que escuchó e identificó su acento extranjero** (tercera declaración: cuaderno de primera instancia [2006-IV]. Tomo IX. Declaración de l Fojas 529 a 533).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y además fue valorada al momento de determinar la responsabilidad en el delito de secuestro y en el de delincuencia organizada.³²⁹

Los testimonios de los agentes federales contenidos en dicho parte informativo **también se han visto afectados por lo que hemos denominado como efecto corruptor**, ya que el documento representa, ni más ni menos, que la versión oficial de la autoridad de lo ocurrido el 9 de diciembre de 2005. El parte informativo inicia con la narración de la detención de la recurrente, pasando por el traslado a y el supuesto rescate de las víctimas, y concluye con el traslado de los detenidos a las dependencias ministeriales³³⁰. Este documento pretendía ser el soporte probatorio a través del cual la autoridad pudiese sostener aquella realidad alternativa a la que nos venimos refiriendo desde el inicio de esta sentencia.

Asimismo, no podemos pasar por alto el hecho de que, una vez comprobado que dicha realidad no fue más que una escenificación, la información contenida en el parte informativo tuvo que adaptarse a lo que en verdad ocurrió. Esto explica que los propios agentes involucrados hayan modificado su versión de los hechos en la aclaración de su parte informativo³³¹.

Así las cosas, resulta indudable que los testimonios de los policías federales no pueden ser considerados como una prueba de cargo respetuosa de la presunción de inocencia de la ahora recurrente³³².

³²⁹ *Supra* apartado II.3. Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo I. Parte de la detención por los policías federales de Fojas 190 a 194; y cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: (Fojas 148 a 150); (Fojas 163 a 167); y (Fojas 169 a 172), todas ocurridas el 1° de marzo de 2006.

³³⁰ Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo I. Parte de la detención por los policías federales de Fojas 190 a 194.

³³¹ *Supra* apartados II.3 y II.4.E. Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: (Fojas 148 a 150); (Fojas 157 a 161); (Fojas 163 a 167); y (Fojas 169 a 172), todas ocurridas el 1° de marzo de 2006.

³³² En cualquier caso, aunque no se aceptase lo anterior, de igual forma procedería la inmediata y absoluta liberación de la quejosa. Lo anterior debido a que ya compurgó las penas de prisión que le

Por último, no sobra mencionar que en la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito existen otras pruebas que fueron valoradas³³³. Sin embargo, estas se referían únicamente a cuestiones relacionadas con el otro individuo detenido el 9 de diciembre de 2005:

fueron impuestas por la comisión de los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (cuatro años de prisión) y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (dos años), toda vez que conforme a lo dispuesto en el punto resolutivo noveno de la sentencia del Tribunal Unitario de Circuito, el cómputo para el cumplimiento de la pena impuesta inició el nueve de diciembre de dos mil cinco, de forma que la pena de prisión de seis años correspondiente a esos delitos se extinguió el nueve de diciembre de dos mil once.

³³³ En términos idénticos a como lo había hecho el Tribunal Unitario de Circuito.

³³⁴ Véase el Cuaderno de amparo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se valoran las siguientes **pruebas de cargo referentes a** **Informes** rendidos por la agente de policía Catalina Jessica Murgui Hernández y su **ratificación** en relación con el secuestro de (fojas 845, 878 vuelta y 879); **declaración ministerial y ampliación** de (fojas 845 y 879); **quien pagó el rescate de** (fojas 845 y 879); **las declaraciones ministeriales y judiciales de** las **declaraciones** de su madre, y los **informes** rendidos por los elementos de la AFI: José Luis Escalona Aldama, José Aburto Pasos e Israel Zaragoza Rico, relativos al secuestro de (fojas 845 vuelta a 846 y 879 a 880 vuelta); **declaración** de

, en lo relativo a sus actividades ilícitas, su relación con la persona identificada como " y los otros miembros de (fojas 874 a 875 vuelta); **dictamen pericial** en materia de audio y video con muestra de voz y video de (fojas 850 y 851 vuelta); **dictámenes periciales** en materia de balística en los que se relata que las armas encontradas son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que funcionan correctamente (fojas 859 y 859 vuelta); **declaración ministerial** de

relativa al contrato de arrendamiento del predio celebrado con (fojas 850 vuelta y 851); **diligencia de cateo** de 18 de diciembre de 2005 e **inspección ministerial** de 26 de diciembre de 2005, ambas del (fojas 848 vuelta y 849); **informe** en materia de criminalística con imágenes de (fojas 849 vuelta y 850); **dictamen pericial** en materia de video en el que se filmó el cateo a (foja 850); **inspección ministerial** de camioneta (foja 848 vuelta); **diligencias** de traslado de personal de actuaciones, **inspección ministerial e inventario** del automóvil identificado por

(fojas 846 y 846 vuelta); **parte informativo y ratificación** sobre la denuncia del secuestro de (fojas 847 y 847 vuelta); **declaración ministerial** de empleado del donde trabajaba y su **ampliación** (fojas 802 a 803); **declaración ministerial** de esposa de relativa a la denuncia de su secuestro (fojas 803 vuelta a 805); **declaraciones ministeriales** de padre de las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hijo, en donde reconoce la voz de y entrega las **grabaciones de llamadas telefónicas** sostenidas entre él y quien secuestró a su hijo (fojas 805 a 806 vuelta y 808 vuelta, 810 y 810 vuelta); el oficio PGR/SIEDO/CT/DGAST/00672006 con la **transcripción de las comunicaciones telefónicas** entre el secuestrador y el padre de

(foja 844 vuelta y 854 vuelta); **declaraciones ministeriales** de en las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hermano e identifica la voz de como la de uno de los secuestradores que llamó a su casa (fojas 806 vuelta a 808 vuelta); **declaración y ampliación ministerial** de madre de

en las que relata cómo tuvo conocimiento del secuestro de su hijo y sus comunicaciones con los secuestradores (foja 810 vuelta a 812); **acta circunstanciada de la diligencia de cateo** de 28 de diciembre de 2005, realizada en el inmueble de donde se encontraron distintos objetos de (fojas 844 y 844 vuelta); **parte informativo, ratificación y ampliación de la diligencia** realizada por distintos miembros de la AFI en la que recorrieron un barrio de con para que reconociera la primera casa donde estuvo secuestrado (fojas 847 y 847 vuelta); **pericial** en materia de representación gráfica sobre el inmueble de e informe de criminalística practicado a dicho inmueble (foja 847 vuelta); **pericial** en materia de video sobre la diligencia de cateo realizada en el inmueble de (fojas 850 y

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

En definitiva, es evidente que el material probatorio en contra de la recurrente **no pueden considerarse prueba de cargo válida** al haber sido alcanzados por el efecto corruptor derivado de una violación a la presunción de inocencia. En este caso, dicha violación ocurrió en un doble plano, como **regla de trato extraprocesal** que establece la forma en la que debe ser tratado una persona acusada de un delito antes de empezar un proceso o fuera de éste; y como **regla probatoria** que disciplina los requisitos que han de cumplir las pruebas de cargo para considerarse válidas.

Por todo lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que **el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse influenciadas por aquélla.** Al respecto, es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, el efecto corruptor, al haber subvertido el material probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordenados por nuestra Constitución.

XII. EFECTOS DE LA SENTENCIA

Como señalamos en su momento, y por las circunstancias específicas de este caso, **la violación a los derechos fundamentales a la notificación, contacto y asistencia consular; a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia –en los términos aquí expuestos– han producido un efecto corruptor en la totalidad del proceso seguido en contra de**

850 vuelta); **declaración de** sobre negociaciones del secuestro de
(fojas 848 y 848 vuelta); **declaración ministerial de**
esposo de / padre de , y sus dos **ampliaciones**, en las que narró
las condiciones del secuestro de su esposa y su hijo los hechos posteriores que le son propios
(fojas 825 vuelta a 832 y 873 vuelta) y, por último, **el informe policial** y
su **ratificación**, relativo a la orden de investigación del secuestro de y en el que
se mencionan varios secuestros más (fojas 880 vuelta a 881 vuelta).

viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados. Lo anterior resulta aplicable a los delitos por los que fue condenada la recurrente.

Es importante establecer que esta no es la primera ocasión en la que la Primera Sala determina que la violación material a un derecho fundamental vicia tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados, por lo que procede otorgar la libertad del sentenciado cuando la violación produce la afectación total del derecho de defensa.

Así, en el amparo en revisión /2008 y en su respectiva aclaración de sentencia³³⁵, esta Primera Sala consideró que si el tema de estudio lo constituía la violación de un derecho fundamental del procesado, en ocasión del incumplimiento de un deber estatal y cuya transgresión resultaba en una afectación grave a los derechos a la defensa adecuada y al debido proceso, los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no fueran la inmediata libertad del procesado. Mismas consideraciones se sostuvieron en el amparo directo /2010³³⁶.

La solución adoptada en la presente sentencia resulta, además, acorde con el contenido del artículo 1° constitucional, cuyos párrafos segundo y tercero deben entenderse como una obligación genérica para el Estado mexicano orientada a buscar, siempre y en todo momento, una tutela efectiva de los derechos fundamentales de los gobernados, reconociéndose la imperiosa necesidad de adoptar las medidas que resulten necesarias para reparar integralmente las violaciones cometidas contra dichos derechos.

Así, y por las circunstancias que hemos expuesto a lo largo de la sentencia, la medida que resulta más acorde con el espíritu restitutorio,

³³⁵ Amparo en revisión /2008. Ministra Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar. Resuelto el 6 de mayo de 2009. Aclaración de sentencia en el amparo en revisión /2008. Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar.

³³⁶ Amparo directo /2010. Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: .
Resuelto por unanimidad de cuatro votos en sesión de 2 de febrero de 2011.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

tanto del artículo 1° constitucional como del propio juicio de amparo, es la inmediata y absoluta libertad de la recurrente.

En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **revoca la sentencia recurrida y ordena la absoluta e inmediata libertad de**

Por lo anteriormente expuesto y fundado,

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a
en contra de la autoridad y el acto
precisados en los antecedentes de esta sentencia.

TERCERO. A través del medio de comunicación más eficaz, comuníquese a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y
ordénese la libertad absoluta e inmediata de

CUARTO. En cumplimiento a lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, comuníquese al Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México el sentido de este fallo.

Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria. Devuélvanse los autos relativos al lugar de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

212
FORMA A-53

PRIMERA SALA

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011.

México, Distrito Federal, a **siete de marzo** de dos mil doce.

Con fundamento en el artículo 185, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se señala para la audiencia respectiva en este asunto el día **veintiuno de marzo** de dos mil doce y siguientes. Doy fe.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

México, Distrito Federal, a **veintiuno de marzo** de dos mil doce.

Se hace constar, con fundamento en el artículo 186, de la Ley de Amparo, que en sesión de esta fecha, celebrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con asistencia de los señores Ministros: **Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente)**. A petición del Ministro Ponente, se acordó:

Devolver los autos a la Presidencia de esta Primera Sala, para el efecto de retornar a uno de los Ministros de la mayoría que voto por la concesión del amparo, para la elaboración de nuevo proyecto

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

LSJ/pgt.



**AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 517/2011.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En veintiuno de marzo de dos mil doce, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo acordado por los Ministros integrantes de la misma, en sesión que tuvo verificativo el veintiuno del mes en curso. Conste. -----

México, Distrito Federal, a veintiuno de marzo de dos mil doce. -----

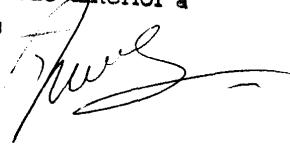
Visto lo acordado por los Ministros integrantes de esta Sala, en sesión que tuvo verificativo el veintiuno de marzo del presente año, en el expediente en que se actúa; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo segundo, 21, fracción III, inciso a) y 25, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, retúrnense los presentes autos a la Ponencia de la **MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS**, a fin de que elabore el proyecto de resolución respectivo y con él dé cuenta a esta Sala. -

Notifíquese. -----

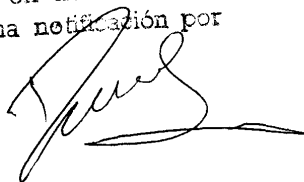
Así lo proveyó y firma el **MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA**, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Heriberto Pérez Reyes. -----

LSJ/pgt.

22 MAR. 2012 Por lista de la misma
fecha, se notificó el acuerdo anterior a
los interesados. Conste,



Siendo las catorce horas de la fecha antes
indicada, y en virtud de no haber compe -
recido los interesados a oír notificaciones,
se tiene por hecha dicha notificación por
medio de lista. Doy fé.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE ACUERDOS
PRIMERA SALA

* * *

CUADERNILLO RELACIONADO CON
EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011.

AMICUS CURIAE

**SOBRE EL PROYECTO EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011 QUEJOSA Y RECURRENTE:**

**, PRESENTADO POR EL PONENTE: ARTURO
ZALDÍVAR LELO DE LARREA SECRETARIO: JAVIER MIJANGOS Y
GONZÁLEZ**

Que presentan las víctimas:

**Y las siguientes organizaciones que están a favor de los derechos
humanos de las víctimas:**

Presidenta de
A.C., Presidente de A.C. y
Presidente de la A.C., y
AC.

CONTENIDO

- I. NATURALEZA DE ESTE "AMICUS CURIAE" ✓
- II. COMUNICADO DEL MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- III. PLANTEAMIENTO CENTRAL DEL PROYECTO
- IV. DAÑOS CAUSADOS A LAS VICTIMAS DEL DELITO DE SECUESTRO POR EL PRONUNCIAMIENTO A PRIORI DEL MINISTRO ARTURO ZALDIVAR LELO DE LA LARREA
- V. EL INTERES DE LAS ORGANIZACIONES AC, Y AC, PARA COMPARECER ANTE ESTA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
- VI. DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN LA LEGISLACION INTERAMERICANA, EUROPEA CONSTITUCIONAL Y NACIONAL
 - LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
 - EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE.
 - EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
 - LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN QUE DEBEN SER OBSERVADAS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA.

SIN TEXTO



PODER JUDIC
SUPREMA CORT
SECRETAR

- LOS PARÁMETROS DEL ACCESO A UN RECURSO SENCILLO, RÁPIDO Y EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
 - LA OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA.
 - LAS REGLAS BÁSICAS PARA LA TRAMITACIÓN Y DECISIÓN DEL RECURSO SENCILLO Y BREVE, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA AL MISMO.
 - DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EUROPA
- VII. **LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS HASTA EL AÑO 2008 SEGÚN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 14/2007**
- VIII. **DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO.**
- IX. **COMPARATIVO ENTRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS ANTES Y DESPUES DE LA REFORMA DE 2008.**
- X. **LA TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS Y SU APLICACIÓN POR LA CORTE INTERAMERICANA.**
- XI. **EL ROL DE LOS JUECES EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN.**
- XII. **EL DEBIDO PROCESO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.**
- XIII. **LA FLAGRANCIA Y SU APLICACIÓN EN EL CASO DE**
- XIV. **VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL DEBIDO PROCESO Y LA TEORÍA DE**
- EXCLUSIÓN DE PRUEBA EN LOS DIVERSOS SISTEMAS
 - EN LA CORTE EUROPEA DE LOS DERECHOS HUMANOS
 - EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL
 - EN COLOMBIA
 - EN PERÚ.
 - EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
- XV. **LA PRUEBA INDICIARIA COMO MECANISMO PROBATORIO EN LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA.**
- XVI. **ANÁLISIS DE LAS ARGUMENTACIONES RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 517/2011, PROMOVIDO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA POR**
- XVII. **ANÁLISIS DEL GRADO DE AFECTACIÓN O NO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGÚN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. RESPETO AL DEBIDO PROCESO,**
- XVIII. **PUNTOS PETITORIOS**

**PRIMERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E**

en nuestra calidad de víctimas del delito de de
Secuestro, cometido entre otros por

SIN

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARIA DE
FIRM

Presidenta de **A.C.**,
 Directir General de **A.C.** y Presidente de la

A.C. y

AC. por nuestro propio derecho y en nombre de la
 ; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones,
 aún las de carácter personal, el ubicado en
 DF, con fundamento en el artículo 1 y 8 de la
 Constitución Federal, nos permitimos exponer lo siguiente:

GENERAL:

I. NATURALEZA DE ESTE "AMICUS CURIAE":

El Amicus Curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es la opinión jurídica y voluntaria que ofrecen terceros ante un Tribunal para colaborar con la resolución de un proceso.

En el sistema jurídico mexicano existen precedentes sobre el planteamiento del Amicus Curiae, en los que se entendió como un documento válido per se, lo que no hace obligatorio que el juzgador se manifieste en cuanto a su contenido.

Entonces, esta figura jurídica debe entenderse como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y estándares que, en el presente caso, se relacionan sustancialmente con los derechos humanos.

Además, el Amicus Curiae es una institución reconocida dentro de los procedimientos seguidos en diversos tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda y la Corte Especial para Sierra Leona.

En la especie, la resolución de la revisión del amparo directo interpuesta por la , resulta de interés para las personas, que integran este Amicus Curiae ya que presenta una serie de elementos para pronunciarnos sobre el tema de la protección de los derechos humanos de las víctimas.

Lo anterior, para colaborar en la vigencia de un Estado Democrático de Derecho que sea respetuoso de la Constitución Mexicana y el derecho internacional de los derechos humanos.

PLAIN TEXT



DEPARTMENT OF JUSTICE
SUPREMACY CORPUS
SECRETARY

El presente Amicus Curiae tiene como finalidad a llegar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los argumentos y elementos jurídicos trascendentes que enriquezcan su inminente fallo, sin menoscabo del respeto que nos merece la independencia de este órgano jurisdiccional.

II.- COMUNICADO DEL MINISTRO PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El día 6 de febrero el ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, mando un comunicado a los medios (radio, televisión, prensa, internet) sobre el sentido que iba a resolver el amparo de la francesa y publicado así:

"...CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo.- El ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso otorgarle amparo a la ciudadana y ordenar su inmediata y absoluta libertad.

El ministro encargado de elaborar el proyecto de resolución del recurso que presentó a la ciudadana la Corte, como una oportunidad extraordinaria, jurídica (cuarta) para tratar de revocar la sentencia de 60 años que pesan en su contra por el plagio de un menor de edad, una mujer y un joven, establece como una de las razones principales que de su detención no se haya informado al consulado francés, cometiendo de ese modo la violación al derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular.

A través de un comunicado, el ministro subrayó las razones que motivaron el sentido de su resolución.

Resaltó que en la detención de hubo dilación para ponerla a disposición del agente del Ministerio Público, y por tal situación el proyecto del ministro Zaldívar Lelo de Larrea declara la violación al derecho fundamental de los detenidos a ser puesto a disposición inmediata ante dicha autoridad.

Indica que no se encuentra justificación constitucional alguna por el tiempo en el que fue retenida.

El proyecto señala que se enfrenta a un caso en el que la violación a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron, por sí mismas, una indefensión total de

10/11/11

10/11/11

10/11/11



Aunado a lo anterior, en el caso concreto esta indefensión se produce no sólo por la violación individualizada de estos derechos, sino porque, además, estas violaciones provocaron la afectación total del procedimiento al tener una incidencia "devastadora" en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada.

Además, consigna el comunicado, al quedar acreditado en el expediente que los agentes de policía que detuvieron a _____ no contactaron de inmediato con el consulado francés, el proyecto declara la violación al derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular.

El proyecto señala que una asistencia consular efectiva sólo será aquella que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero, ya que es en ese espacio temporal en el que la comprensión de la acusación, la comprensión de los derechos que le asisten al detenido, la comprensión básica del sistema penal al que se enfrenta, la comprensión de los efectos de la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto o contratación de un abogado local a fin de establecer una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión.

Asimismo, señala que la importancia de este derecho radica en que se configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino como un derecho instrumental para la defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros.

En consecuencia, el proyecto establece que hubo una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia de

Por último, el proyecto señala que la violación a los derechos de la sentenciada generaron un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de

Esto es así, ya que _____ fue señalada a priori como la responsable de un delito, sin que mediara un juicio que esclareciera su situación jurídica..."

III. PLANTEAMIENTO CENTRAL DEL PROYECTO

Los elementos centrales del planteamiento del proyecto de sentencia en el caso son los siguientes:

10-11-1964 - 10-11-1964



1. El análisis del contenido de la obligación de la policía, en caso de detención en flagrancia, de presentar al detenido de inmediato ante el Ministerio Público, conforme al artículo 16 de la Constitución, y las consecuencias que su retraso tienen en el debido proceso. En este caso un retraso del mismo en la opinión del Ministro tiene consecuencias de atentar contra todo el debido proceso.

2. La obligación de la autoridad de un país para informar a la autoridad consular de la detención de un extranjero, que el proyecto del ministro en lugar de interpretar la constitución y los tratados lo llevan-incluso-, en caso de ser aprobado, a legislar en las siguientes materias:

- a) Que está en manos de la policía y no del Ministerio Público, como lo señalan las leyes federales.
- b) Las consecuencias que un retraso en esta obligación de informar tiene en el debido proceso. (24 horas de retraso respecto de la notificación del MP y 36 horas respecto del momento de la detención).
- c) La creación de la obligación ultra nacional para el Estado extranjero (todos los del Mundo) de garantizar el derecho de defensa de sus ciudadanos en México, de manera inmediata y a cualquier hora y en todo el territorio nacional.
- d) La consecuencia que una afectación de esta naturaleza tiene en el derecho de defensa y el debido proceso.

3. La confusión de los conceptos del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia generando una nueva idea de que existe una presunción de "inocencia extraprocesal" a cargo del público en general y que puede tener un efecto intraprocesal con efectos catastróficos para el proceso, que no toma en cuenta que en México y en Poder Judicial Federal los Jueces tienen autonomía e independencia. La teoría del Ministro implica que todos se sugestionan con un programa de televisión y después el efecto perdura a través del tiempo y en la mente de todos los mexicanos.

4. La Confusión de la teoría de la nulidad de la prueba contenida en el artículo 20 apartado a) de la Constitución, **(según el nuevo modelo procesal acusatorio, cuya entrada en vigencia está condicionada en lo términos de los Artículos Transitorios Primero a Cuarto de la Reforma del 18 de junio de 2008)**, que señala textualmente que "toda prueba obtenida contra derechos fundamentales será nula", ya que el proyecto no distingue entre las siguientes expresiones:

SIN TEXTO



a) **"Derechos Fundamentales"** que es utilizado sólo una vez en la Constitución (sólo en este dispositivo constitucional) y que debe ser ligada a la expresión del artículo 14 que habla de "formalidades esenciales del procedimiento". Esta norma se complementa con la que indican los requisitos para las medidas de investigación que requieren control judicial como los cateos, las intervenciones de comunicaciones privadas, y otros medios de investigación autorizados en las leyes, que señala "Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio (art 16 párrafo decimo cuarto)". Es decir la teoría de la prueba nula es que sólo afecta a la prueba obtenida contra "derechos fundamentales".

b) **"Derechos humanos"**, a los que se les debe aplicar la teoría general de los derechos humanos que estipulan la Corte Europea y la Interamericana, y que hablan de que la presunción de inocencia y el debido proceso que son conceptos relativos, no derechos absolutos.

c) **"Garantías individuales"**, que están en el texto de la Constitución vigente cuando sucedieron los hechos y cuando el procedimiento penal correspondiente fue iniciado.

d) **"Violaciones a los procedimientos legales"**, que no son "formalidades esenciales del procedimiento", según el artículo 14 de la Constitución y que no configuran el termino "debido proceso" (**due process of law**).

e) Otras **ilicitudes menores en el juzgamiento**.

En resumen, el proyecto aplica una teoría de exclusión probatoria en la que cualquier violación a cualquier obligación de la autoridad, incluso las inventadas por el proyecto, ya que no tienen sustento legal (como la obligación de la policía de notificar al consulado), producen no la nulidad de la prueba (como lo marca el artículo 20 apartado a de la Constitución solamente en el caso de "derechos fundamentales") sino de todo el proceso, ignorando el artículo 14 que lo obliga a distinguir sobre las formalidades esenciales del procedimiento.

Esta Teoría de la Prueba es una aplicación extralógica de la teoría de la prueba llamada del "árbol envenado", pero llevada irracionalmente al extremo, la que ya ha sido abandonada en las sentencias de las cortes constitucionales de muchos países, incluso en el mismo Estados Unidos, y la Corte Europea de los Derechos Humanos. En particular porque representa una violación a los derechos de las víctimas.

Q11

11-11-11

11-11-11

C

C

C

C

5. Omisión absoluta de garantizar los Derechos Humanos de las Víctimas, en franca contradicción con el artículo 1 de la Constitución, que comienza con omitir hechos denostrados y evidfentes en el expediente como tener demostrados los hechos de secuestro, de los que lógica y jurídicamente no se puede dudar.

Los anteriores elementos se prueban como sigue:

Sobre la obligación de la autoridad de notificar al Consulado el Proyecto del Ministro se atreve a alargar los derechos hasta niveles extranacionales, afirma que:

"Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede ser concebido como un mero requisito de forma. Cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero la posibilidad de suplir sus carencias a través de los medios que el artículo 36 de la Convención de Viena pone a su disposición, no solo limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada.

Para el detenido extranjero, el derecho a la asistencia consular tiene una función propia y diferenciada tanto del derecho a tener un abogado como del derecho a tener un traductor o intérprete.

TRACIÓN
NACIÓN
E LA

La asistencia consular no se reduce a una simple medida de comunicación entre el extranjero y un representante de su gobierno. Es ante todo un derecho fundamental reconocido para evitar la indefensión del inculcado, que no depende de los conocimientos que tenga el extranjero del idioma del país en el que ha sido detenido.

El funcionario consular tiene la encomienda de asegurarse, en primer término, de que el extranjero no sea simplemente informado de la acusación y de los derechos que le asisten, sino que los comprenda cabalmente.

La comprensión del significado gramatical de las palabras que contiene la acusación puede ser facilitada por un traductor. Es más, una explicación técnica de las implicaciones de la acusación puede ser facilitada por un abogado que esté habilitado para ejercer en ese país. Sin embargo, esto no resulta suficiente a fin de considerar cumplido el mandato constitucional de una defensa adecuada".

Q1117

Q1117

Q1117



COMENTARIO: EL PROYECTO DEL MINISTRO PRETENDE REGULAR LA ACTIVIDAD DE LOS CONSULADOS EXTRANJEROS Y SUS ACTIVIDADES, QUE ESTÁN REGULADOS EN LAS CONSTITUCIONES Y LEYES DE CADA PAÍS. LA OBLIGACIÓN BÁSICA DEL ESTADO (MÉXICO) ES DE INFORMAR AL CONSULADO, LO QUE EL CONSULADO HAGA CON ESA INFORMACIÓN NO PUEDE AFECTAR A LA INVESTIGACIÓN Y AL PROCESO DE UN ESTADO. EL DERECHO DE DEFENSA ADECUADO ES RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL MARGEN DE APRECIACIÓN, DE CADA ESTADO, SEGÚN LA TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CORTE EUROPEA, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE TENER UN TRADUCTOR. ESTO TAMBIÉN, SEGÚN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. LLEVANDO AL EXTREMO LA TEORÍA DEL MINSITRO, MEXICO TENDRIA QUE EXIGIR QUE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES HAGA UN EXAMEN PREVIO A LA ACEPTACION DE LOS CONSULES EXTRANJEROS EN MEXICO, SOBRE EL DERECHO NACIONAL, SÓLO EN ESTE CASO SE ESTARÍA EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LO QUE EL MINISTRO ESTABLECE. SIN EMBARGO ESTO ES UN IMPOSIBLE, PUES VIOLENTA EL CONTENIDO DE LA PROPIA CONVENCIÓN DE VIENA, YA QUE SON LOS PAISES LOS QUE DETERMINAN QUIENES SON SUS AGENTES EN OTRO.

"A fin de que se considere que un extranjero ha sido informado de forma libre y consciente de estas cuestiones, es indispensable que se encuentre cubierto el elemento relativo a la idiosincrasia cultural. La herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante al momento de comprender cualquier fenómeno jurídico, con especial gravedad respecto a aquellos actos que impliquen la privación de la libertad.

En algunos ordenamientos jurídicos, la declaración ante los agentes de policía y la colaboración con las autoridades que investigan un delito puede ser considerado a lo largo del proceso como una muestra de buena voluntad por parte del detenido. Por el contrario, en otros sistemas, resulta recomendable que los inculcados no externen ningún comentario hasta que se encuentren en presencia de un juez. Asimismo, en ciertos ordenamientos jurídicos, cooperar con la policía y aceptar determinados hechos puede ameritar, a futuro, una reducción de condena. En otros, resulta irrelevante la confesión espontánea del inculcado.

Estas cuestiones, como es lógico, no son conocidas ni debidamente ponderadas por los abogados nacionales. Este tipo de decisiones solo pueden ser tomadas una vez que se ha recibido una efectiva asistencia técnica, la cual debe ser otorgada por los funcionarios consulares, quienes por su actividad profesional presumiblemente se encuentran debidamente capacitados para dicha tarea.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPLENTE DE
SECRETARÍA DE
PRW

En definitiva, el núcleo fundamental del derecho a la defensa adecuada de un extranjero es preciso ubicarlo, no solo en la modalidad de la designación de un perito en Derecho, sino en la efectividad de la defensa.

En esta línea, una asistencia consular efectiva solo será aquélla que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero, ya que es en ese espacio temporal en el que la comprensión de la acusación, la comprensión de los derechos que le asisten al detenido, la comprensión básica del sistema penal al que se enfrenta, la comprensión de los efectos de la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto o contratación de un abogado local a fin de establecer una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión. Esta exigencia, por lo demás elemental y obvia, se constituye como un elemento básico de la tutela judicial a fin de preservar todos los derechos de defensa de un extranjero."

COMENTARIO: ES EVIDENTE LA POSTURA HIPERGARANTISTA A FAVOR DEL IMPUTADO E HIPOGARANTISTA EN CONTRA DE LAS VÍCTIMAS Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA ES UNA GARANTÍA QUE NO PUEDE LLEVAR A QUE EL MINISTRO LA EXIJA DE UNA MANERA EN QUE PRÁCTICAMENTE SE SUSTITUYE EN EL IMPEDIR QUE LA POLICÍA Y EL MINISTERIO PUBLICO PUEDAN LLEVAR A CABO SUS ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. LA PROPUESTA DEL MINISTRO NO ES QUE SE RESPETEN LAS GARANTIAS DE LA PROCESADA SINO QUE SE LE PREPARE PARA LA IMPUNIDAD. LA OBLIGACION DEL ESTADO ES RESPETAR SU DEBIDO PROCESO INCLUYENDO EL DERECHO A QUE CONOZCA LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA, QUE NO SEA OBLIGADA A DECLARAR, TENER UN TRADUCTOR, QUE ANTES DE SER INTERROGADA, TENGA UN ABOGADO, INCLUSO PAGADO POR EL ESTADO, PERO NO PUEDE SER QUE EL ESTADO CARGUE CON LA ESTRATEGIA DE DEFENSA, PUES BASTA QUE SE LE PROPORCIONE EL ABOGADO, PARA QUE SE GENERE LA DEFENSA ADECUADA, CUANDO ESTA CAPACITADA. ESTO ES ASI EN TODOS LOS PAISES DEL MUNDO. EL ALARGAMIENTO HIPERGARANTISTA QUE PRETENDE HACER EL MINISTRO CONSISTE EN QUE LA CARGA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA LA TIENE EL ESTADO.

SIN TEXTO

LA CORTE E.
SECRETARIA E.

"El derecho fundamental contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se quedaría en una mera declaración de buenas intenciones, si la asistencia se sucede en un momento procesal en el que los elementos que acabamos de describir ya no resultan relevantes para la suerte del procesado, lo que conllevaría que el funcionario consular se convierta en un simple convidado de piedra. Esto es, alguien a quien se le invita por compromiso, pero que no es tenido en cuenta. En definitiva, la importancia del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular radica en que se configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino como un derecho instrumental para la defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros. Es decir, la posibilidad de que un extranjero pueda ser oído públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, depende -de forma absoluta- del presupuesto previo relativo a la asistencia real y efectiva de los miembros de la oficina diplomática de su país".

COMENTARIO. ESTE AFIRMACIÓN EXTRALÓGICA DEL PROYECTO IMPLICARÍA QUE MÉXICO TUVIERA PRESENCIA CONSULAR INMEDIATA Y PERMANENTE EN TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO LAS 24 HORAS DEL DÍA Y 365 DÍAS DEL AÑO, Y EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ATENDER DE ESTA MANERA A TODOS LOS MEXICANOS DETENIDOS Y PROCESADOS EN EL MUNDO, Y VICEVERSA, Y LO QUE ES MÁS FUERA DE LA LÓGICA, QUE TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO, AUN LOS MÁS POBRES, DEBAN HACERLO EN MÉXICO, A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO NACIONAL Y DONDE HAYA UNA DELEGACIÓN DE POLICÍA. ESTO ES ALGO ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE DE LOGRAR, FÁCTICA, Y JURÍDICAMENTE, LO QUE MUESTRA EL FORZAMIENTO DE LOS CONCEPTOS Y ANÁLISIS PARA LLEGAR A UNA CONCLUSIÓN.

"...En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el derecho individual de información establecido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de expansión a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables. Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 124. 278

**SIN
TEXT**

ESTADOS UNIDOS
PODER JUE
SUPREMA CO
SECRET

El Proyecto del Ministerio continua proponiendo legislar sobre que no solo el ministerio público, sino la policía tienen obligación de informar al Consulado señalando que

"Si la policía, en el momento en que detuvo a la recurrente, hubiera garantizado los derechos relativos a la asistencia consular de

y hubiera contactado con el Consulado General de la República Francesa en México, la mera presencia del funcionario consular hubiera disuadido, seguramente, a la Agencia Federal de Investigación de efectuar la escenificación ajena a la realidad o, si no, por lo menos, el funcionario consular hubiera denunciado de forma inmediata las actividades de la policía.

Sin embargo, esto no fue así. Lo cierto es que la policía violó de forma clara y contundente los derechos fundamentales de la recurrente y decidió continuar con su conducta contraria a la Constitución, procediendo a montar un escenario a través del cual pudiese imputar la responsabilidad de tres secuestros a

COMENTARIO: EN MÉXICO, HASTA AHORA, LA POLICÍA NO TIENE OBLIGACIÓN DE INFORMAR, ENTRE OTRAS RAZONES PORQUE ES EL MINISTERIO PÚBLICO AL QUE DEBE ENTREGAR DE MANERA INMEDIATA A LOS DETENIDOS Y ES EL ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN. ADEMÁS, EN MÉXICO EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN NO DA VALIDEZ A DECLARACIONES REALIZADAS SIN ABOGADO DEFENSOR, POR LO QUE LAS REALIZADAS FRENTE A LA POLICÍA CARECEN DE VALOR PROBATORIO. POR LO TANTO, LA POSTURA DEL MINISTRO NO APLICA LA SANA CRÍTICA, ES DECIR, ¿CÓMO SE PUEDE SOSTENER QUE SI LA POLICÍA HUBIERA AVISADO NO HABRÍA HABIDO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANA ?. ¿QUÉ SIGNIFICA, QUE LA POLICÍA DEBIÓ HABER AVISADO A LAS CUATRO DE LA MAÑANA AL CONSULADO Y RETENERLA HASTA QUE LLEGARA EL CÓNSUL PARA CUMPLIR CON LOS EXTREMOS?. ¿QUÉ PASARÍA SI EL CÓNSUL TARDA VARIAS HORAS EN LLEGAR?, ¿QUE PASARÍA SI COMO EN MUCHOS CASOS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS DETENIDOS NO EXISTE CÓNSUL EN EL PAÍS Y TIENEN QUE TOMAR UN AVIÓN PARA LLEGAR?



SECRET
CART
DTC

La Corte Europea de Derechos Humanos en el caso vs España señaló que los policías no atentan contra la presunción de inocencia porque no son funcionarios judiciales¹. Como se verá mas adelante este criterio cambió, ajustandose a una afectación mayor.

"Pues bien, esta escenificación ajena a la realidad –que se sucedió a partir de la violación a la asistencia consular y a la puesta sin demora– tiene repercusiones directas e inmediatas en la violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia."

COMENTARIO: ¿DE VERDAD EL MINISTRO EN SU PROYECTO, PIENSA QUE LA AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA NOTIFICACIÓN CONSULAR, QUE SE MATERIALIZO EN UN DÍA DE RETRASO TIENE EL MISMO EFECTO QUE EL CASO / OTROS NACIONALES MEXICANOS, DONDE MÉXICO NUNCA FUE NOTIFICADO Y POR TANTO LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DETERMINO LA VIOLACIÓN AL DERECHO DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONVENCIÓN Y AL DEBIDO PROCESO?. EL MINISTRO TENDRÍA QUE DECIR CÓMO SE AFECTO EL DERECHO DE DEFENSA., POR UN RETRASO DE 24 HORAS, CUANDO A PARTIR DE AHÍ, LA SENTENCIADA SIEMPRE TUVO ABOGADO Y EN SU PRIMERA DECLARACIÓN NO PRODUJO NINGÚN ELEMENTO EN SU CONTRA.

Por otra parte, en el caso **v. FRANCE** de la misma Corte Europea, bajo el número de demanda 1 /89, se sucedieron hechos similares en donde el Ministro de Interior de Francia, el jefe de la Policía y otras autoridades acusaron a una persona en publico de haber ayudado y participado en un homicidio. La sentencia comprueba violaciones al derecho de presunción de inocencia, por haberse referido a la persona como culpable sin llevarlo a juicio; sin embargo determina que la afectación al debido proceso fue menor y por esto FIJA UNA INDEMNIZACIÓN POR LA VIOLACIÓN PERO NO DECLARA LA AFECTACION TOTAL DEL DEBIDO PROCESO. A continuación se citan algunos párrafos de la sentencia.

¹ La Corte europea en el caso de 90. ambién afirmaron ser víctimas de una falta de aplicación de la presunción de inocencia, indicando que fueron condenados exclusivamente sobre la base de sus confesiones a la policía y que la Audiencia Nacional dio muestras de parcialidad en contra de ellos. Basándose en los términos de las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, el Gobierno declaró que la Audiencia Nacional había tenido en cuenta, de hecho, las pruebas presentadas ante ella.

91. La presunción de inocencia se vulneraría si, si el que los acusó de haber sido declarados culpables hubiera sido una decisión judicial. En este caso, no se desprende de la evidencia que durante el procedimiento, y en particular el juicio, la Audiencia Nacional o el juez hubiera tomado decisiones o actitudes que reflejan esta opinión. El Tribunal por lo tanto, no encuentra una violación del artículo 6, párr. 2 (art. 6-2) de la Convención

**SIN
TEXT**



"A. Los antecedentes del caso

8. El 24 de diciembre 1976 el _____ un miembro del Parlamento (departamento de Eure) y ex ministro, fue asesinado frente a la casa del solicitante. Acababa de visitar a su asesor financiero, e _____ quien vivía en el mismo edificio y con el que el _____ tenía la intención de convertirse en el copropietario de un restaurante de París,

" . El plan fue financiado por medio de un préstamo obtenido por la víctima. El había pasado el capital obtenido en préstamo al solicitante, quien fue el responsable de pagar el préstamo.

9. Una investigación judicial se inició en contra de una persona de quien resulte responsable por el delito de homicidio intencional. El 27 y 28 de diciembre de 1976, la brigada criminal de París en la sede de la policía arrestó a un número de personas, incluyendo al asesor financiero de la víctima. El día 29 se detuvo el

B. La rueda de prensa de 29 de diciembre de 1976 y que implican al del solicitante. El 29 de diciembre de 1976, en una conferencia de prensa sobre el tema del presupuesto de la policía francesa para los próximos años, el Ministro del Interior, el _____ el Director del Departamento de Investigación Criminal de París, _____ y el Jefe de la policía criminal, el _____ superintendente se refirieron que la investigación estaba en marcha.

11. Dos cadenas de televisión francesas informaron esta conferencia de prensa en sus programas de noticias. La transcripción de los extractos pertinentes es el siguiente:

"TF1 NOTICIAS

lector de noticias: ...Sea como fuere, aquí es cómo todos los aspectos del caso de _____ fueron explicadas al público en una conferencia de prensa dada por el _____ ayer por la tarde.

El caso esta solucionado. Todos los involucrados están ahora bajo arresto después del _____. Es una muy simple historia. Un préstamo bancario garantizado por el señor De Broglie que debe ser pagado por el _____

Un periodista: Superintendente, quien fue la figura clave de este caso? _____ ?
Creo que debe haber sido el Sr. _____

ATIS
TERRA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
PRI

: El instigador, el , y su acompañante, el , fueron los instigadores del asesinato. El organizador fue el detective el sargento y el asesino era el señor .

!l: Como puedes ver, esas declaraciones incluyen una serie de afirmaciones. Es por eso que la policía está siendo criticado por funcionarios del Ministerio de Justicia. Aunque el Superintendente y el tuvieron el cuidado de (final de la grabación).

Antenne 2 NOTICIAS

l, lector de noticias: ...Esta noche, por lo tanto, el caso ha sido aclarado. Los motivos y el nombre del asesino se sabe.

: El organizador fue y el asesino era el señor Freche.

Eso es correcto. No puedo ... [ininteligible] los hechos para que al decir thatte caso surgió de un acuerdo financiero con la víctima, entre el señor señor.

: Es una historia muy simple. Un préstamo garantizado por el señor que debía devolver el señor

Un periodista: Superintendente, quien era la figura clave de este caso? ?

Creo que debe haber sido el Sr.

periodista: El préstamo fue garantizado por una póliza de seguro de vida de millones de francos antiguos tomadas por

En el caso de su fallecimiento, la suma asegurada debería ser pagada a

El punto de inflexión llegó ayer por la noche cuando un oficial de policía, fue el primero en hablar. Él admitió que él había organizado el asesinato y había prestado un arma de fuego para matar. También contrató al asesino a sueldo, que se le prometió

de francos antiguos y que a su vez se encuentran dos personas que lo acompañara. Las razones de su caída fueron, en primer lugar, que el nombre de apareció en el diario de , y segundo, que lo mataron frente al no. 2 rue de

Eso no estaba planeado. La intención había sido llevarlo en otro sitio, pero tal vez se negó a seguir a su asesino. En todo caso, que fue su primer error. al parecer, se negaron a

**SIN
TEXT**



JUDICIAL DE LA
ORTE DE JUSTICA
SECRETARIA DE ACUER
PRIMERA SALA

236

pagarles. Eso llevó a las reuniones secretas en bares, el sombreado de la policía e informadores - sabemos que el resto de la historia - y su detención. El segundo error fue hecho por . Antes de contactar con se acercó a otro asesino a sueldo, que rechazaron el trabajo, pero al parecer, hablaron con otras personas sobre el asunto. Para atrapar a los asesinos, la policía realísticamente basó su investigación en dos ideas sencillas. En primer lugar, el asesinato fue cometido en la calle de los cuando salió de la casa de . Había necesariamente un vínculo entre el asesino y . En segundo lugar, el pasado de no hablaba a su favor y la policía lo consideró como un asesor legal bastante dudoso. Esas dos ideas simples y sobre sesenta investigadores llevó al descubrimiento de los asesinos.

El epílogo del caso coincidió con una reunión de gabinete en la que se discutió la cuestión de la seguridad pública ... "

12. El 14 de enero 1977 el fue acusado de complicidad en homicidio intencional y puesto bajo custodia. Fue puesto en libertad el 1 de marzo de 1977 y una orden de no ejercicio de la acción penal se emitió el 21 de marzo de 1980."

COMENTARIO: EN ESA OCASIÓN EL GOBIERNO FRANCÉS SEÑALÓ QUE NO HABÍA AFECTACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, CUANDO EN SU DEMANDA ANTE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS EL APLICANTE (QUEJOSO) SEÑALÓ LA VIOLACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

La sentencia citada continua señalando.

"A. Aplicación del artículo 6, párr. 2 (art. 6-2)

32. El Gobierno no acepta, en sustancia, la aplicabilidad del artículo 6, párr. 2 (art. 6-2), basándose en la sentencia contra Suiza del 25 de marzo de 1983 (serie A, núm. 62). Sostuvieron que la presunción de inocencia puede ser violada sólo por una autoridad judicial, y se pudo demostrar que se ha infringido sólo cuando, a la conclusión de los procedimientos que terminan en una condena, el razonamiento de la corte sugiere que consideraba al acusado como culpable de antemano.

33. La Comisión reconoció que el principio de presunción de inocencia, sobre todo, es una garantía procesal en los procedimientos penales, pero consideró que su alcance es más amplio, ya que impone obligaciones no sólo en los tribunales penales que determinan los cargos criminales, sino también de otras autoridades.

SENTENCIA

TER JUDICIAL
REMA CONE DE JU
SECRETARIA DE AC
P. MESA

34. La tarea del Tribunal es determinar si la situación encontrada en este caso afecta el derecho del demandante en virtud del artículo 6, apartado. 2 (art. 6.2) (véase, V. El juicio de Austria, de 25 de agosto de 1993, serie A núm. 266-A, p. 13, párr. 22).

35. La presunción de inocencia consagrado en el párrafo 2 del Artículo 6 (art. 6-2) es uno de los elementos del juicio penal justo lo que se requiere en el párrafo 1 (art. 6.1) (véase, entre otras autoridades, V. El juicio de Bélgica, de 27 de febrero de 1980, serie A núm. 35, p. 30, párr. 56, y la sentencia antes citado, p. 15, párr. 27). No se vulneraría si una decisión judicial sobre una persona acusada de un delito penal refleja la opinión de que es culpable antes de que se ha demostrado su culpabilidad, conforme a la ley. Es suficiente, incluso en ausencia de ninguna declaración formal, que no exista algun razonamiento que sugiera que el tribunal se refiere a los acusados como culpables (véase la sentencia antes citada, p. 18, párr. 37).

Sin embargo, el alcance del artículo 6, párr. 2 (art. 6-2) no se limita a la eventualidad mencionada por el Gobierno. La Corte sostuvo que no habían registrado violaciones de esta disposición en los casos anteriormente citados, si bien los tribunales nacionales competentes habían cerrado las actuaciones en el primero de los casos debido a que el plazo había expirado y que había absuelto a la demandante en el segundo. Se ha celebrado de manera similar que sea aplicable en otros casos en los tribunales nacionales no tuvieron que determinar la cuestión de la culpabilidad (véase el V. El juicio de Austria, de 26 de marzo de 1982, serie A núm. 49, y los contra Alemania sentencias de 25 de agosto de 1987, Serie A nn. 123-A, 123-B y 123-C).

Por otra parte, la Corte reitera que la Convención debe interpretarse de tal manera que se garanticen los derechos que son prácticos y efectivos en lugar de teórica e ilusoria (véanse, entre otras autoridades, el Artico V. El juicio de Italia, de 13 de mayo de 1980, serie An 37, página 16, párrafo 33;... la contra el juicio de Reino Unido de 7 de julio de 1989, serie A, n 161, p 34, párrafo 87;... y la y otros contra el juicio de Suecia 20 de marzo 1991, serie A núm. 201, p. 36, párr. 99). Eso también se aplica al derecho consagrado en el artículo 6, párr. 2 (art. 6-2).

36. La Corte considera que la presunción de inocencia puede ser vulnerada no sólo por un juez o tribunal, sino también por otras autoridades públicas.

37. En el momento de la conferencia de prensa del 29 de diciembre 1976 el señor acababa de ser detenido por la policía (véase el párrafo 9). A pesar de que aún no había sido acusado de complicidad en homicidio intencional (véase el párrafo 12 supra), su arresto y detención bajo custodia policial formaba

PLN
TEXTU



DER JUDICIAL DE
SENIA CORTE DE JUST.
SECRETARIA DE ACU
PRIMERAS

parte de la investigación judicial iniciada unos días antes por un juez de instrucción de París e hizo de él una persona "acusada penalmente" en el sentido del artículo 6, párr. 2 (art. 6-2). Los dos oficiales superiores de la policía presentes estaban llevando a cabo las investigaciones del caso. Sus observaciones, realizadas en paralelo con la investigación judicial y con el apoyo del Ministro del Interior, se explica por la existencia de esa investigación que tenía una relación directa con él. El artículo 6, párr.2 (art. 6-2) por lo tanto, se aplica en este caso.

B. Cumplimiento con el artículo 6 párr. 2 (art. 6-2)

1. La referencia al caso en la conferencia de prensa

38. La libertad de expresión, garantizado por el artículo 10 (art. 10) de la Convención, incluye la libertad de recibir y difundir información. El artículo 6, párr. 2 (art. 6-2) por lo tanto no puede impedir que las autoridades informen al público acerca de las investigaciones penales en curso, pero se requiere que lo hagan con toda la discreción y prudencia necesaria si la presunción de inocencia debe ser respetada.

2. El contenido de los estados se quejaron de

39. Al igual que el demandante, la Comisión considera que las observaciones hechas por el Ministro del Interior y, en su presencia y bajo su autoridad, por el superintendente de policía a cargo de la investigación y el Director del Departamento de Investigación Criminal, eran incompatibles con la presunción de inocencia. Señaló que en ellos el Sr. se presentó como uno de los instigadores del asesinato del señor de

40. El Gobierno sostiene que las declaraciones de este tipo fue bajo el título de información acerca de los procedimientos penales en curso y que no eran tales como para infringir la presunción de inocencia, ya que no se unen los tribunales y podría ser probado falso por investigaciones posteriores. Los hechos del caso lo confirman, ya que el demandante no había sido formalmente acusado hasta dos semanas después de la conferencia de prensa y el juez de instrucción había decidido finalmente que no había ningún elemento para acusar.

41. La Corte observa que en el presente caso algunos de los oficiales de más alto rango en la policía francesa a que se refiere el Sr. sin ningún tipo de cualificación o de reserva, lo presentaron como uno de los instigadores de un asesinato y por lo tanto como cómplice (véase el párrafo 11 supra). Esto fue claramente una declaración de culpabilidad del solicitante que, en primer lugar,

SECRET

TO: SUPREMA CORTE DE
SECRETARIA DE
FISCALIA

anima al público a creer que es culpable y, en segundo lugar, se prejuzga la apreciación de los hechos por la autoridad judicial competente. Por ello, ha habido una violación del artículo 6, párr. 2 (art. 6-2).

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

1. Declara, por ocho votos contra uno que ha habido una violación del artículo 6, párr. 2 (art. 6-2) de la Convención;

2. ...

3. Declara, por ocho votos contra uno, que el Estado demandado debe abonar a la demandante un plazo de tres meses, de francos franceses por los daños;

4. Declara, por unanimidad que el Estado demandado debe abonar a la demandante un plazo de tres meses, francos franceses, más impuesto al valor agregado, por los costos y gastos;

5. Descarta unánimemente el resto de la demanda de satisfacción equitativa.

CONCLUSION EN UN HECHO SIMILAR FRANCIA ES CONDENADA POR LA VIOLACION DEL DERECHO DE UN INVESTIGADO, PORQUE SE VULNERA EL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA, PERO AUN CUANDO HA DETERMINADO QUE TIENE CIERTA INFLUENCIA EN EL DEBIDO PROCESO, NO SE DETERMINA EL SUPUESTO FALLO CATASTROFICO DEL QUE HABLA EL PROYECTO DEL MINISTRO. YA QUE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS DETERMINA SIEMPRE COMO RELATIVOS LOS DERECHOS.

Continúa el proyecto:

"Por otra parte la actual redacción de esta porción normativa del artículo 16 constitucional fue modificada a través de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. En el momento de los hechos, el mandato en estudio se encontraba ubicado en el párrafo cuarto del artículo 16 y establecía lo siguiente: "En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público". En cualquier caso, lo relevante es que el mandato de puesta a

SIN-THREE



Una vez que hemos desarrollado el contenido esencial del derecho fundamental a la notificación, contacto y asistencia consular, es necesario ocuparnos del derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar si, efectivamente, se actualiza la violación de estos derechos en el caso concreto.

El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que "cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención"

COMENTARIO: EN EL CASO DE V. FRANCE, DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS SE DETERMINO QUE:

117. Los malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad si es que entran en el ámbito del artículo 3. La evaluación de este mínimo depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración del tratamiento, sus efectos físicos o mentales y, en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima (véase, por ejemplo, Irlanda contra el Reino Unido, 18 de enero de 1978, § 162, serie A núm. 25). Al evaluar la evidencia sobre la cual basar la decisión de si se ha producido una violación del artículo 3, la Corte adopta el estándar de la prueba "más allá de toda duda razonable". Sin embargo, esta prueba puede derivarse de la coexistencia suficientemente fuerte, de inferencias claras y concordantes o de similares presunciones de hechos no han sido refutados.

118. La Corte ha considerado que el tratamiento sea "inhumano" porque, entre otras cosas, fue premeditado, se aplicó durante horas de un tirón y ha causado ya sea lesiones físicas reales o intenso sufrimiento físico o mental. Se ha considerado que el tratamiento sea "degradante" porque era como para despertar en los sentimientos de las víctimas el miedo, angustia e inferioridad capaces de humillar y degradar los mismos (véase, entre otras autoridades, contra Polonia [GS], núm. / 96,

Al considerar si un castigo o tratamiento es "degradante" en el sentido del artículo 3, la Corte tendrá en cuenta si su objetivo es humillar y degradar a la persona en cuestión y si, por lo que las consecuencias se refiere, afectado negativamente a su personalidad de una manera incompatible con el artículo 3 (ver, entre otras autoridades, contra Finlandia, 16 de diciembre de 1997, § 55, Repertorio 1997-VIII). Sin embargo, la ausencia de tal propósito no se puede

SIN-TEXTO



descartar de manera concluyente de la constatación de una violación del artículo 3 (ver, entre otras autoridades, contra Grecia, núm. : /95, § 74, TEDH 2001-III).

119. Para que un castigo o tratamiento asociado sea "inhumano" o "degradante", el sufrimiento o la humillación en cuestión debe, en todo caso ir más allá de ese elemento inevitable de sufrimiento o humillación a una determinada forma de trato o pena legítimos (ver, entre otras autoridades, V. contra el Reino Unido [GS], núm. /94, § 71, TEDH 1999-IX. Indelicato, antes citada, § 32; Ilascu y otros contra Rusia [GC], No. /99, § 428, TEDH 2004-VII.; y y otros contra los Países Bajos, no. /99, § 62, 4 de febrero de 2003). A este respecto, la Corte observa que las medidas privativas de una persona de su libertad, a menudo conllevan este tipo de elemento. Sin embargo, el artículo 3 obliga al Estado a garantizar que los presos estén detenidos en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de la ejecución de la medida no los someta a angustia o dificultad de una intensidad superior a un inevitable nivel de sufrimiento intrínseco a la detención y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente (ver antes citada, § § 92-94, ; contra Rusia, no. /99, § 95, TEDH 2002-VI). El Tribunal añade que las medidas adoptadas también debe ser necesarias para alcanzar el objetivo legítimo perseguido. Además, al evaluar las condiciones de detención, se tiene en cuenta los efectos acumulativos de estas condiciones, así como los alegatos específicos formulados por la demandante (véase contra Grecia, no. /98, § 46, TEDH 2001. -II)."

COMENTARIO. ESO ES PRECISAMENTE LO QUE EL PROYECTO DEL MINISTRO NO HACE, EVALUAR LOS EFECTOS Y LOS IMPACTOS AUN DE LOS MALOS TRATOS QUE PUDIERON HABERSE DADO, Y SI DE ELLOS SE OBTUVO PRUEBA. POR EL CONTRARIO DETERMINA DE MANERA AUTOMATICA EL FALLO CATASTROFICO DEL DEBIDO PROCESO.

EN CUANTO A la presunción de inocencia, que desarrolla el proyecto del Ministro Zaldivar en la que señala que hay tres aspectos de la presunción de inocencia: el tradicional, contenido en el artículo 20 apartado b, fracción I del nuevo modelo procesal acusatorio, establecido en el decreto de reforma de junio de 2008, que señala que nadie puede ser considerado como culpable hasta que se venza su inocencia en un juicio con las debidas formalidades. El de valoración de prueba y el extraprocesal que según el proyecto del ministro presenta un aspecto intraprocesal que puede producir un fallo catastrófico (invento del proyecto).

SIN TEXTO



En la doctrina tradicional mexicana se llama acto de privación penal, el que debe de cumplir con las formalidades de los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Mexicana, para obtenerse una sentencia condenatoria que imponga una pena. En ellos y para generar el acto de privación penal, y en consecuencia determinar a una persona como penalmente responsable, es necesario tener acreditado la existencia del delito y probada la responsabilidad penal, con el debido respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.

Todo ello de conformidad con el margen de apreciación que soberanamente el país ha decidido en los términos del artículo 40 de la Constitución. El llamado "debido proceso" traducido del inglés "due process of law", y que siempre ha existido en la Constitución Mexicana en el concepto de la formalidades esenciales del procedimiento que desde luego incluyen todas las garantías del artículo 5, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La propia Constitución señala que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, sin embargo, los señalados en el artículo 20 apartado B) fracc. I del nuevo modelo procesal, tiene relación con el apartado A, que determina que la carga de la prueba esta en la acusación. Y desde luego de una manera histórica con el principio del "indubio pro reo", pero no pueden confundirse con el. Como se verá mas adelante el proceso de valoración de prueba y el grado de certeza que requiere el nuevo modelo procesal mexicano es el del convencimiento, pero con fundamentación y motivación, es decir después de valorar la prueba de manera libre y lógica; y excluir la prueba que haya sido obtenida contra derechos fundamentales. A esto el proyecto del ministro lo llama Presunción de inocencia en valoración de prueba, pero en realidad son un conglomerado de derechos ligados al debido proceso penal que forman el acto de privación penal.

El Ministro, inventa la teoría de que dentro presunción de inocencia anterior al juicio que el llama extraprocesal y que puede tener un efecto catastrófico en la presunción de inocencia y no en el debido proceso y mas aun le da características exorbitantes. Se trata de una acto que es metaconstitucional, ya que crea elementos constitucionales mas allá de la interpretación previsible de la Constitución y los tratados. Se trata en suma de una ilegítima mutación constitucional por via interpretativa.

El proyecto afirma:

"Pues bien, existe otra vertiente de la presunción de inocencia que ha sido menos estudiada y que en nuestro caso reviste una importancia capital: **la presunción de inocencia como**

SIN TEXTO



regla de trato en su vertiente extraprocesal. Esta faceta de la presunción de inocencia constituye un **derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza.** En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas". Asimismo, y a diferencia de lo que sucede con la regla de juicio, la violación a esta vertiente de la presunción de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales. *Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad..."*

Además, la violación a la presunción de inocencia como regla de trato puede afectar de una forma –intraprocesal– mucho más grave aún los derechos relativos a la defensa del acusado. **Puede introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa.**

Así, la presunción de inocencia se relaciona tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona, como con la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio.

La violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir en un proceso judicial cuando la **manipulación de la realidad por parte de la policía tiende a referirse a:** (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la

SIN TEXTC


POBET
SINTEMA
SECH



posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el *resultado* de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) *cualquier* opinión sobre la culpabilidad del detenido; y (v) el *hecho* de que alguien hubiera identificado al detenido, entre muchas otras.

Así, en este tipo de escenarios resulta que el “verdadero juicio” se celebró mucho antes de la aparición del juez. En las situaciones a las que nos estamos refiriendo la policía no pretende facilitar información de la causa que se tramita ante los tribunales, sino anticipar o reproducir su desarrollo, pero sin cumplir con las garantías del debido proceso.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011“

 **ACCIÓN** Esta misma lógica ha sido sostenida por la Corte Interamericana, la cual estableció en el Caso *Vs. México* que “el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acusa”³¹⁰.”

COMENTARIO: RESULTA ESTA UNA AFIRMACION QUE IGNORA LOS ELEMENTOS CONSTITUCIONALES PARA CALIFICAR A UNA CONDUCTA PRESUNTAMENTE DELICTIVA. TODA NORMA INCLUSO LAS PENALES SON UN ESQUEMA DE INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD DE CONDUCTAS Y DE HECHOS, LA CONSTITUCIÓN EXIGE LA EXTERIORIZACION DE CIERTAS CALIFICACIONES DELICTIVAS EN CIERTOS CONTEXTOS COMO REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE ACTUACION, ASI:

a) LA CONSTITUCION EXIJE LA PRESENTACION DE UNA CALIFICACION DELICTIVA COMO (DENUNCIA O QUERELLA) COMO UN REQUISITO PARA LA ORDEN DE APREHENSION (ART 16)

b) CUANDO EL JUEZ EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 16 EMITE UNA ORDEN DE APRHENSION CALIFICA LOS HECHOS QUE ESTABLECEN QUE UN HECHO DELICTIVO SUCEDIÓ Y QUE HAY LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.

SIN TEXTO



c) CUANDO ALGUIEN, INCLUSO LOS POLICIAS, DETIENEN A UNA PERSONA EN EL MOMENTO DE ESTAR COMETIENDO EL DELITO O INMEDIATAMENTE DESPUES, EN LOS TERMINOS DE LA CONSTITUCION ESTAN OBLIGADOS A INFORMAR, SEGÚN LO MARCA EL APARTADO B DEL ARTICULO 20, A INFORMAR EL POR QUÉ DETIENEN (CLAUSULA MIRANDA MEXICANA). DEBEN TAMBIEN ELABORAR UN PARTE, QUE ES EL QUE SIRVE DE BASE PARA LA RETENCION DEL MINISTERIO PUBLICO .

d) EL MINISTERIO PUBLICO RETIENE, SEGÚN EL 16 DE LA CONSTITUCION A UNA PERSONA Y TAMBIEN ESTA OBLIGADO A INFORMAR EL POR QUÉ.

e) EL JUEZ, CUANDO CALIFICA LA DETENCION Y CUANDO DA EL AUTO DE FORMAL PRISION O EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, TAMBIEN CALIFICA CONDUCTAS Y HECHOS CORRELATIVOS. PUES TODA NORMA ES SIEMPRE UN ESQUEMA DE INTERPRETACION DE CONDUCTAS Y HECHOS.

TODOS ELLOS SON ACTOS DE CALIFICACION DEL HECHO DELICTIVO Y DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD Y SON REQUISITOS CONSTITUCIONALES QUE NO VIOLAN LA PRESUNCION DE INOCENCIA, PUES COMO SE DEMOSTRará MAS ADELANTE LA PRESUNCION DE INOCENCIA NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, SEGÚN LAS SENTENCIAS DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS.

LA DIFERENCIA LOGICA, JURIDICA Y CONSTITUCIONAL EN ESTA MATERIA CONSISTE EN QUE PARA QUE SE DE EL ACTO DE PRIVACION QUE DESTRUYE LA PRESUNCION DE INOCENCIA, SE REQUIERE, COMO LO POSTULA EL GARANTISMO DE FERRAJOLI, O LA CONSTITUCION MEXICANA EN EL ACTO DE PRIVACIÓN PENAL, DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS GARANTIAS, ARTICULOS 14, 16, 17, 19, 20, 21 Y 22 CONSTITUCIONALES.

NO CABE PUES, DE NINGUNA MANERA EL CONCLUIR QUE EXISTIO UN JUICIO ANTICIPADO, SI NO UNA EXPOSICION ILEGITIMA DE LA SENTENCIADA QUE PUEDE DAÑAR SU HONRA, Y SU DERECHO A LA IMAGEN, PERO QUE NO PUEDE DECIRSE QUE DESTRUYÓ SU PRESUNCION DE INOCENCIA.

ADEMAS, DE CONFORMIDAD CON EL 21 DE LA CONSTITUCION EL MINISTERIO PUBLICO Y LAS POLICIAS DEBEN INVESTIGAR LOS DELITOS Y PARA INVESTIGAR ES NECESARIO TENER HIPOTESIS DE INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS. ESTA ES LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE EL ARTICULO 21 PARA LOGRAR LA SEGURIDAD PUBLICA Y QUE ESTÁ EN RELACION CON EL 20 QUE EXIGE QUE SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS Y QUE SE PROCURE

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ACUERDO
PRIMERA

QUE EL CULPABLE NO QUEDE IMPUNE. DESDE LUEGO DESPUES DE PROTEGER AL INOCENTE.

SIN EMBARGO LA VIOLACION A ESTE ELEMENTO NO PUEDE TRAER COMO CONSECUENCIA QUE UN DERECHO HUMANO, COMO LA IMAGEN O LA PRIVACIDAD DEBA SER NECESARIAMENTE LA EXCLUSION PROBATORIA ABSOLUTA Y NO LA SANCION A LA QUE DEBEN QUEDAR SUJETOS LOS VIOLADORES DE ESTOS DERECHOS, SEAN POLICIAS Y MINISTERIOS PUBLICOS.

ES DECIR, EN SU PROYECTO, EL MINISTRO ZALDIVAR CONFUNDE PRESUNCION DE INOCENCIA CON DEBIDO PROCESO O FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.

EL PROYECTO DEL MINISTRO NO TOMA EN CUENTA QUE EL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION EXIGE LA MOTIVACION DE LOS ACTOS, EN EL CASO SE PRODUCERON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS QUE JUSTIFICAN LA DETENCION: VIVIA EN LA CASA DONDE SE TENIAN A LOS SECUESTRADOS, ERA NOVIA DEL SECUESTRADOR, EL TELEFONO ESTABA A SU NOMBRE. TODAS ELLOS CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN UNA DETENCION. LA VIOLACION DE SUS DERECHOS AL EXHIBIRLA ANTE LA PRENSA EN UN ACTO QUE DEBE SER INVESTIGADA Y SANCIONADA PERO NO PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA UNA SANCION TRASCENDENTE CONTRA LAS VICTIMAS.

El proyecto agrega que:

Es importante señalar que el respeto de las autoridades policiales y ministeriales a la regla que venimos desarrollando se encuentra exigido en nuestro ordenamiento jurídico, no solo en virtud del derecho a la presunción de inocencia sino también por lo establecido en el artículo 21 constitucional."

Como acertadamente señala la recurrente en su agravio primero y sexto agravio, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de buena fe ministerial, al establecer que: "la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución".

SIN TEXTO



Resulta indudable que con la inclusión de este apartado en el artículo 21 constitucional, el constituyente tuvo por objetivo establecer un estándar constitucional relativo a la actuación de los policías: la legalidad, la honestidad, la eficiencia y el cumplimiento de las normas de derechos fundamentales." Como ya lo ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad pública va de la mano, necesariamente, del respeto al orden constitucional. En esta lógica, "resulta inadmisiblemente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo".

COMENTARIO. DESDE LUEGO QUE LA VIOLACION A CUALQUIER DERECHO HUMANO DEBE SER REPARADA INCLUYENDO LA INVESTIGACION Y LA REPARACION DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA SENTENCIADA, PERO ES COMPLETAMENTE ILOGICO QUE ESTA SANCION TRASCIENDA HASTA ANULAR TODOS LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y AL FINAL LA DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.

A continuación, deberemos proceder a determinar si, en el caso concreto, la recurrente sufrió la violación a su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

fue expuesta repetidamente y en profundidad a un espectáculo que resulta inadmisiblemente en un sistema democrático de derechos y libertades. Nadie que hubiese visto la televisión ese día y durante los meses siguientes, podría negar que tal espectáculo fue, para los miles y miles de ciudadanos que lo vieron y oyeron, el auténtico juicio de - Cualquier proceso judicial realizado después, en la que víctimas y testigos fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una mera formalidad.

COMENTARIO. DESDE EL INICIO DEL PROYECTO EL MINISTRO DEJA A UN LADO LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO DE MANERA INDUBITABLE, TALES COMO **QUE SUCEDIERON TRES SECUESTROS**, QUE ESTÁN ACREDITADOS DE MANERA INDUBITABLE EN EL PROCESO, QUE HAY VICTIMAS, QUE VIVÍA CON EL SECUESTRADOR DURANTE 7 MESES Y QUE LOS SECUESTRADOS ESTABAN EN LA CASA QUE COMPARTÍA CON EL SECUESTRADOR Y SÓLO SE BASA EN LA REPRESENTACIÓN INADMISIBLE DE UNA DETENCIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA.

SIN TEXTO.

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SECRETARIA
PDI



En efecto el documento empieza con los siguientes aspectos:

"I. LA ESCENIFICACIÓN AJENA A LA REALIDAD Debido a la importancia que tienen las imágenes transmitidas por las principales cadenas televisión nacional durante la mañana del 9 de diciembre de 2005, tanto para la comprensión de los hechos como para la resolución del presunto asunto, resulta necesario hacer un recuento de ellas desde este momento1."

"En el mismo orden de ideas, el hecho de que las autoridades orquestaran un montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el proceso porque, además de que la sociedad entera fue sugestionada, **también lo fueron las personas involucradas en el proceso**, viciándose la fiabilidad de sus declaraciones. Esta situación resulta inadmisibile y peligrosa en un estado democrático de derecho, pues la probabilidad de ocasionar una identificación errónea e irreparable en contra de la quejosa estuvo latente desde ese momento. Este peligro aumentó considerablemente, cuando, como se ha establecido en la presente sentencia, la escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad, situación que produjo, desde un inicio, la manipulación de las circunstancias y hechos que constituyen el objeto de la investigación."

COMENTARIO: PARA EL MINISTRO NO TIENE IMPORTANCIA QUE LOS SECUESTROS ESTAN PLENAMENTE ACREDITADOS; NI SUS VICTIMAS. PARECE QUE LA SEÑORA IBA PASANDO POR EL LUGAR COMO UNA TURISTA, SIN RELACION CON LOS HECHOS BASICOS QUE ESTAN PROBADOS EN EL EXPEDIENTE: QUE FUE NOVIA DEL SECUESTRAADOR, QUE VIVIA EN ESE LUGAR, QUE EL TELEFONO ESTABA A SU NOMBRE, QUE SE UBICA EN TODO MOMENTO EN TIEMPO, LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO DE SECUESTRO, QUE COMO SE SABE ES UN DELITO CONTINUO QUE INICIA CUANDO SE PRIVA DE LA LIBERTAD Y TERMINA CUANDO SE LIBERA A LA VICTIMA, ES DECIR DURA CASI TRES MESES, Y QUE SE TRATA DE TRES SECUESTRADOS. PARA EL MINISTRO FUE EL MONTAJE EL QUE HIZO QUE SE PUSIERA EN MEDIO DE LOS HECHOS DELICTIVOS INVESTIGADOS Y NO HECHOS COMPLETAMENTE COMPROBADOS QUE LA UBICAN EN TIEMPO, LUGAR Y CIRCUNSTANCIA.

PARA EL PROYECTO DEL MINISTRO ESTOS HECHOS NO CUENTAN, SINO SOLO CUENTA UNA VIOLACION A LOS DERECHOS DE IMAGEN DE LA CONDENADA, QUE HICIERON QUE TODO EL PAIS, SE CONVENCIERA EN JUICIO PREVIO DE OPINION PUBLICA DE QUE ELLA ERA CULPABLE, SIN QUE SE PUEDA DAR UN JUICIO JUSTO EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA EN ESTE PAIS, A PESAR DE QUE LA SEÑORA CONTO CON

SIN TEXTO



LOS MEJORES ABOGADOS EN SU PROCESO. ES UN ACTO MAGICO QUE LA VUELVE CULPABLE, LA ESCENIFICACION DE UN VIDEO. HECHO REPROBABLE RELALIZADO POR LA AUTORIDAD QUE DEBE SER SANCIONADO, PERO CUYA SANCION NO PUEDE TRASMITIRSE A LAS VICTIMAS DEL DELITO.

EL PROYECTO DEL MINISTRO DUDA QUE EXISTAN INCLUSO LOS SECUESTROS, A PESAR DE QUE ESTA DEMOSTRADO FEHACIENTEMENTE, Y AL HACERLO ASI VIOLA SUS RESPONSABILIDADES EN TORNO A LAS VICTIMAS Y AL ARTICULO PRIMERO DE LA CONSTITUCION EN RELACION CON EL ARTICULO 20 APARTADO C DE LA CONSTITUCION.

El proyecto del Ministro concluye que la violación de algunos derechos que afectaron parcialmente los derechos de la sentenciada tiene consecuencias que igualan la teoría de la nulidad de la prueba en el artículo 20, apartado A): "toda prueba obtenida contra derechos fundamentales será nula", con cualquier violación procesal, lo que provoca la nulidad total, catastrófica, del proceso, independientemente de si la afectación termina con los derechos fundamentales de la víctima. El Proyecto señala que:

*Así las cosas, y como fue extensamente expuesto en los antecedentes de esta sentencia, los tribunales que han juzgado este caso **tuvieron como pruebas de cargo**, a fin de tener por acreditada la responsabilidad de en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, **las referidas a los testimonios de las tres víctimas y el de un tercero.***

COMENTARIO: PARA EL MINISTRO NO SON IMPORTANTES LOS INDICIOS UNICOS, CONCORDANTES Y GRAVES QUE SEÑALAN QUE EXISTIO EL SECUESTRO, QUE VIVIA CON EL SECUESTRADOR, QUE VIVIA EN LA CASA DONDE FUERON RESCATADOS. NO, SE TRATA SOLO DE UN MONTAJE DE LOS POLICIAS.

*"Empezando por el último testigo, de nombre Testigo 4, resulta claro el **efecto corruptor** que la escenificación ajena a la realidad tuvo en su testimonio, ya que **el mismo día** que las autoridades admitieron que las imágenes mostraban un montaje, y 5 días después de que esa información saliera a la luz pública, este testigo compareció voluntariamente ante el Ministerio Público a declarar que identificaba a la recurrente como una de las secuestradoras **en virtud de lo que había visto en la televisión**³²⁰.*

*"Respecto a la declaración de la víctima menor de edad, de nombre Víctima-Testigo 3, es importante partir del hecho de que a pesar de haber estado presente en la escenificación ajena a la realidad, **ese***

SIN TEXTO



U.S. JUDGE
MA. COURT
SECRETARY
F

mismo día –ante el agente del Ministerio Público– **declaró que no reconocía a** **físicamente ni por su voz** (una vez que esta le fue expuesta en la Cámara de Gesell)³²¹. Sin embargo, 67 días después del día del operativo, y solo 9 después de que saliera a la luz pública el hecho de que los videos difundidos constituían un montaje y que las imágenes volvieran a salir a la palestra, **declaró que identificaba la voz de** **como la de una mujer que tenía un acento raro y extranjero y que le había inyectado durante su cautiverio.**

Una situación similar sucede con la Víctima-Testigo 2, madre del anterior testigo, la cual, a pesar de haber estado presente en la escenificación ajena a la realidad, **ese mismo día** –ante el agente del Ministerio Público– **declaró que no reconocía a** **como una de sus secuestradores, indicando que la diligencia de reconocimiento era la primera vez que la veía y que su voz no coincidía con la de los secuestradores. Finalmente, agregó que los oficiales de la Agencia Federal de Investigación le informaron que** **había participado en su secuestro**³²³. Sin embargo, 61 días después del día del operativo y solo 3 después de que saliera a la luz pública el hecho de que los videos difundidos constituían un montaje y que las imágenes volvieran a salir a la palestra, declaró que **su hijo le comentó que una mujer con acento raro fue quien le sacó sangre**³²⁴. **Siete días después,** la Víctima-Testigo 2 compareció nuevamente a declarar y en esta ocasión describió **que su hijo y ella escucharon a una persona extranjera cuya voz, según la reconocieron en los noticieros, es la de** **. Consecuentemente, identificó a la quejosa como la mujer que escuchó en las dos casas de seguridad Y MAS ADELANTE CONTINUA**

Por último, en lo que hace a la víctima de nombre Víctima-Testigo 1, es importante recordar que **fue entrevistado en el mismo lugar de los hechos hasta en cuatro ocasiones distintas por los medios de comunicación** presentes en **Según se desprende de esos testimonios, reconoció como uno de sus captores al individuo que acompañaba a la recurrente, pero no a**

Una vez que fue trasladado a las dependencias del Ministerio Público, la Víctima-Testigo 1 declaró que reconocía como parte de los secuestradores, en virtud de su acento de origen y del color de su cabello. Ese mismo día, por la noche, dio una entrevista en exclusiva para un noticiero televisivo en la que ya no solo la reconoce, si no que le otorga uno de los principales roles dentro de sus secuestradores” Respecto a este testigo, es necesario señalar que fue uno de los personajes más activos en la escenificación ajena a la realidad, ya que se vio sometido al “filtro” creado por la autoridad desde un inicio, en un escenario en el cual la ahora recurrente era señalada hasta la saciedad como la culpable. Esta situación produce una falta de

SIN TEXTO



fiabilidad en su testimonio, ya que la deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación lo transformó involuntariamente en uno de los actores, provocando condiciones sugestivas de tal calado que resulta imposible considerar a su declaración como una prueba de cargo respetuosa con la presunción de inocencia de la ahora recurrente.”

COMENTARIO: EL MINISTRO Y SU EQUIPO NUNCA HAN INTERROGADO A NINGUNA DE LAS VICTIMAS Y SIN EMBARGO HACEN AFIRMACIONES COMO SI LO HUBIERAN HECHO. EL PROYECTO DEL MINISTRO NO USA LAS REGLAS DE VALORACION QUE IMPONE EL ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCION, ES DECIR, QUE LA PRUEBA HAYA SIDO ANALIZADA POR EL JUZGADOR DE MANERA DIRECTA Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE INCLUSION DE PRUEBA Y ATENDIENDO A LOS CONCEPTOS DE LA PRUEBA LIBRE Y LOGICA, PARA GENERAR UN CONVENCIMIENTO DEL JUZGADOR DE LA CULPABILIDAD DEL SUJETO, Y SOBRE TODO A PARTIR DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCION. TODO ESTE CONVENCIMIENTO DEBE SER DADO EN ELEMENTOS FUNDADOS Y MOTIVADOS PARA EXPLICAR LAS RAZONES DEL MISMO.

Sin embargo y de manera increíble tal vez dándose cuenta de su error en el proyecto el ministro afirma que:

“Es importante advertir que esta Primera Sala no se pronuncia sobre la credibilidad o no de los testigos antes citados. **Lo relevante, a nuestros efectos, es que la escenificación ajena a realidad resulta un elemento que –derivado de sus propios testimonios– resta indudablemente de fiabilidad a sus testimonios.** Esto es así ya que la **exposición al montaje, como personajes y posteriormente como los principales espectadores, predispone a estos individuos para enjuiciar la realidad a través del “filtro” creado por los miembros de la Agencia Federal de Investigación.** Asimismo, y esto resulta aplicable para todos los testigos, esta Primera Sala no soslaya la posibilidad de que las personas que han sufrido experiencias traumáticas recuerden los hechos ocurridos durante las mismas con el paso del tiempo. Sin embargo, en el presente caso la situación es distinta, ya que **ese proceso de recuerdo se vio indudablemente contaminado –consciente o inconscientemente– por el hecho de que las autoridades crearan una realidad alternativa en detrimento de la acusada.”**

**SIN
TEXTO**



OFICIO JUDICIAL
SECRETARIA DE
PRIM

COMENTARIO: ES IMPORTANTE DESTACAR QUE DESPUES DE CALIFICAR LOS TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS-VICTIMAS COMO CONTRADICTORIOS SIN HABER INTERROGADO A LOS MISMOS, Y SIN ENTENDER LOS PROCESOS QUE VIVEN LAS VICTIMAS, SEÑALA QUE NO SE PRONUNCIA SOBRE SU CREDIBILIDAD, SINO QUE A PESAR DE ESTAR DEMOSTRADO QUE FUERON SECUESTRADOS, FUERON ENGAÑADOS POR EL MONTAJE DE LA POLICIA PARA ACUSAR FALSAMENTE A . ADEMAS SUPONE UN EFECTO PERMANENTE, DE LAS VICTIMAS Y DE LA SOCIEDAD Y UNA FALTA DE CAPACIDAD Y ANALISIS DE TODAS LAS PERSONAS.

El proyecto concluye que:

"En definitiva, es evidente que el material probatorio en contra de la recurrente **no pueden considerarse prueba de cargo válida** al haber sido alcanzados por el efecto corruptor derivado de una violación a la presunción de inocencia. En este caso, dicha violación ocurrió en un doble plano, como **regla de trato extraprocesal** que establece la forma en la que debe ser tratado una persona acusada de un delito antes de empezar un proceso o fuera de éste; y como **regla probatoria** que disciplina los requisitos que han de cumplir las pruebas de cargo para considerarse válidas.

"Por todo lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que **el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio incriminatorio, el cual es la base de todo proceso penal y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse influenciadas por aquélla.** Al respecto, es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, el efecto corruptor, al haber subvertido el material probatorio, impide determinar la culpabilidad de la quejosa en los términos ordenados por nuestra Constitución."

COMENTARIO: EL PROYECTO DEL MINISTRO PRESUPONE QUE EL EFECTO DEL MONTAJE POLICIAL ES PERMANENTE EN TODAS LAS MENTES. A PESAR DE QUE SE DEMOSTRO PUBLICAMENTE Y ASI LO CONFESARON SUS AUTORES, Y LOS PERIODISTAS QUE PARTICIPARON EN ÉL, VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE, QUE EL MISMO ES FALSO Y ELABORADO COMO UNA RECREACION TELEVISIVA. ESTO SE HA DICHO HASTA LA SACIEDAD. NO CREEMOS QUE NADIE SIGA PENSANDO QUE SE TRATO DE UN HECHO REAL. LO QUE QUEDA PLENAMENTE DEMOSTRADO CUANDO EL PROPIO MINISTRO EBN SU PROYECTO MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE SE TRATO DE UN MONTAJE Y ESTA PLENAMENTE CONVENCIDO DE ESE HECHO.

SIN TEXTO



SIN EMBARGO, EL PROYECTO PRETENDE QUE LAS VICTIMAS SIGUEN BAJO ESE EFECTO MEDIATICO Y QUE LOS MINISTERIOS PUBLICOS, LOS JUECES Y LOS MAGISTRADOS FEDERALES SIGUEN ENGAÑADOS POR EL MISMO. YA QUE EL EFECTO CORRUPTOR ES TAN PERMANENTE E IREVERSIBLE QUE NO ES POSIBLE QUE NINGUN JUEZ AUTONOMO E INDEPENDIENTE LO PUEDA SUPERAR.

LAS CONFUSIONES DEL PROYECTO, ENTRE DEBIDO PROCESO, NULIDAD DE LA PRUEBA Y LOS CRITERIOS DE VALORACION DE PRUEBA DEL NUEVO MODELO CONSTITUCIONAL MEXICANO SON ABSOLUTAMENTE EVIDENTES. EN LOS PROXIMOS PUNTOS SE DESARROLLARAN LOS ELEMENTOS DE FONDO QUE PERMITEN SOSTENERLO.

AL LEER EL PROYECTO, SE DEMUESTRA UNMONTAJE, EL DE LA POLICIA Y QUE REPRODUCE UNA OPERACIÓN POLICIAL QUE ES ILEGAL Y CONTRA EL DERECHO A LA IMAGEN DE LOS DETENIDOS, Y QUE LASTIMA LA PRESUNCION DE INOCENCIA, AUNQUE NO EL DEBIDO PROCESO, QUE POR TANTO DEBE SER SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DEL ESTADO, (LO QUE POR CIERTO EL PROYECTO NO SOLICITA EN EL PROYECTO LO QUE SI SE HACE EN OTROS CASOS ANTERIORES DEL MISMO MINISTRO).

EL ACTO LESIVO CONTRA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS LO HACE EL MINISTRO NEGANDOLES SU DERECHO A CONOCER LA VERDAD DE MANERA JUDICIAL, Y A LA REPARACION DEL DAÑO, NO DANDOLES EL RECONOCIMIENTO Y EL CUIDADO QUE DETERMINAN LA CONSTITUCION Y LOS TRATADOS, SOSLAYANDO SU IMPORTANCIA A PESAR DEL MANDATO DE LA SOBERANIA POPULAR.

IV. DAÑOS CAUSADOS A LAS VICTIMAS DEL DELITO DE SECUESTRO POR EL PRONUNCIAMIENTO A PRIORI DEL MINISTRO ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA

El pronunciamiento a priori del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha causado daños a los derechos humanos de las víctimas del delito de secuestro, al estar revictimizando, y en ninguna parte de su boletín o de su proyecto de se manifiesta sobre los derechos de las víctimas.

LO QUE DE MOMENTO NO ES MAS QUE LA POSTURA PERSONAL DE UN MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE FUE DADA . AHORA SE EXIJE QUE LOS

SIN TEXTO



OTROS MINISTROS, EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA, FIJEN TAMBIEN SU POSTURA, Y TAMBIEN QUE COMO SE HA OBSERVADO, SE ABRA UN DEBATE EN DONDE TODOS PUEDAN OPINAR ANTE LAS Y LOS MINISTROS QUE HABRÁN DE RESOLVER EL FUTURO DEL SISTEMA PROCESAL PENAL MEXICANO, PARA DETERMINAR SI LA CONSTITUCIÓN PERMITE UN SISTEMA HIPERGARANTISTA A FAVOR DEL IMPUTADO E HIPOGARANTISTA EN CONTRA DE LAS VICTIMAS Y LA SOCIEDAD, O UN SISTEMA DE GARANTÍAS Y DERECHOS PARA TODOS.

V. EL INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS ORGANIZACIONES ALTO AL SECUESTRO AC, MEXICO SOS Y ASOCIACIÓN NACIONAL DE DOCTORES EN DERECHO AC, PARA COMPARECER ANTE ESTA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El interés legítimo de las organizaciones AC, y AC, para comparecer ante esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se base en que:

AC, de AC. Y

AC para hacerse presentes ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, es porque siempre se han manifestado favor de la lucha y el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas y han luchado porque todos los funcionarios públicos, sin excepción promuevan, respeten y garanticen los mismos en igual de circunstancias de los derechos de los imputados.

Estas organizaciones, en compañía de otras como México Unido Contra la Delincuencia y organizaciones de Costa Rica y Chile, en la ciudad y puerto de Mazatlán desarrollaron una Unión Latinoamericana de promoción de los derechos Humanos de las víctimas del Delito en las que se señalo:

PRONUNCIAMIENTO DE MAZATLAN A FAVOR DE LAS VICTIMAS

En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 26 de enero del año 2012, las A.C. presidida por la , la presidida por el y la así como le

SIN TEXTO



representada por el

, se reunieron para dialogar en torno a los

y, considerando que, es necesario garantizar que las víctimas del delito tengan un estatus jurídico y protección en relación con el proceso penal, para que se garanticen sus derechos humanos en el debido proceso con equidad respecto de los derechos humanos del imputado o sentenciado, considerando que a nivel Internacional las Naciones Unidas desde el año de 1985 promovió los principios fundamentales de justicia para la víctimas de delito y del abuso de poder, que garantiza, en la resolución 34 del 20 de noviembre de 1985 diversos derechos a las víctimas entre ellos el acceso a la justicia, un trato justo, asistencia jurídica, resarcimiento e indemnización por los daños que se le ocasionaron; reconociendo también los avances en los derechos a las víctimas del delito que ha hecho la Unión Europea con la decisión marco del Consejo número 1/220/JAI del 15 de marzo del 2001, relativa al Estatuto de las Víctimas en el Proceso Penal en el que se otorgan diversos derechos y garantías a las víctimas entre los que destacan el respeto a su dignidad como persona y como víctima, un trato compasivo, garantizar un papel efectivo y adecuado en el sistema de justicia penal, el ser oídas y permitirles que presenten elementos de prueba, no ser sujetas a una victimización secundaria, velar por que se brinde a las víctimas especialmente vulnerables un trato que responda a su situación; permitirles la obtención de protección y asesoramiento, así como asegurar que al denunciar el delito la víctima no sea sujeta a amenazas o riesgos.

Que es manifiesto el desequilibrio procesal que en algunas de las Legislaciones de Iberoamérica se tienen para las víctimas del delito.

Que el proceso penal debe tener garantías para el imputado para que sea juzgado, garantizándole siempre sus derechos humanos, pero esto no debe conllevar a la violación de los derechos humanos de las víctimas en un marco de una teoría amplia de los derechos humanos, en donde se ponderen los derechos de todos para lograr justicia y seguridad pública.

Que las organizaciones firmantes consideran que ninguna persona inocente debe estar sujeta a prisión, y que por tanto debe respetarse todos los derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso; sin embargo debe existir un equilibrio para lograr el abatimiento de la impunidad, y que la prevención general y especial del delito sea una realidad.

En el marco de las jornadas convocadas en Mazatlán, Sinaloa el día 26 de enero del año en curso, las organizaciones participantes firman un acuerdo para constituir la
A.C.

SIN

TRABAJOS

ESTADOS UNIDOS
PODER. JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SECRETARIA
PRI

Objetivos de la UNION:

Los objetivos de la unión se apoyan fundamentalmente en los documentos internacionales antes citados y además en el documento intitulado "Principios y Directrices Básicas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones" manifestadas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos", aprobado mediante la resolución de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2005;

Los objetivos esenciales son:

La promoción y Defensa de los Derechos Humanos de todas las personas que tengan la calidad de víctima del delito.

Al efecto realizar acciones de promoción de los Derechos Humanos tendientes a manifestar la visión de los elementos de la Unión ante los Órganos Nacionales de los distintos países de aquellas organizaciones.

Brindar y promover que cada víctima de delito sea sometida a un proceso de desvictimación para que pueda tener una mejor calidad de vida.

Participar en las reuniones y Foros Internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras instituciones para manifestar los puntos de vista de sus Asociados e Institutos.

Promover en las Instituciones Nacionales e Internacionales otros instrumentos de apoyo que tiendan a ampliar los Derechos Humanos de las víctimas.

Proponer ante las autoridades competentes (legislativas, ejecutivas y judiciales) de los Estados de las Organizaciones que forman parte de la Asociación, todo tipo de medidas orientadas a ampliar la defensa de los derechos humanos de las víctimas.

Organizar, celebrar, cooperar y participar en toda clase de eventos, jornadas, programas, conferencias, simposios o pláticas que busquen el fomento y la promoción de los fines sociales de la Unión.

Prevía autorización por parte de la autoridad competente en materia hacendaria, recibir donativos en efectivo o en especie de personas físicas o morales privadas,

CON
TEXTO



recaudar fondos y otros ingresos derivados de las actividades que realicen, sin propósitos de lucro, ni de especulación comercial, los cuales serán deducibles de Impuestos.”

Sobre el interés legítimo se han escrito los siguientes elementos:

El LIC. JOSE GERARDO ARRACHE MURGUIA señala que:

“1. En general, la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad.

Las características que permiten identificarlo son:

- a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor exclusivo del accionante.
- b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a engendrar un derecho subjetivo.
- c) Debe existir una afectación que lesione la esfera jurídica del particular.
- d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho.
- e) Es un interés cualificado, particular, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante.
- f) La anulación del acto de autoridad produce efectos exclusivamente en la esfera jurídica del gobernado.

2. Por interés Jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un

PLAIN
TEXT

DICIAI
CORTI DI
CETARICA
PRIN

perjuicio o la lesión de un derecho. También debe considerarse como una facultad para el ejercicio de la acción constitucional derivada de la titularidad que al quejoso corresponde en relación con derechos o posesiones tutelados a través de normas de derecho objetivo, que resulten conculcados por los actos de autoridad”.

Nodo Jurisprudencial.

La Jurisprudencia materia de estudio es la Tesis de jurisprudencia 141/2002, correspondiente a la Novena época, Aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue resuelta, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil dos, al resolver la Contradicción de tesis /2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002. Votada por Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

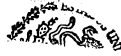
Dicha tesis contiene los siguientes distintivos para su consulta:

Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Diciembre de 2002, Tesis: 2a./J. 141/2002, Página: 241, cuyo rubro y texto señalan:

“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera

SECRET

VER JUDY
-LAW CO
SECRET



jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico."

Por su parte, **Arturo Zaldivar Lelo de Larrea**, en su libro *Hacia una Nueva Ley de Amparo*, señala que: "por virtud del interés legítimo se abre la puerta para la defensa de afectaciones a la esfera jurídica de los gobernados que no violentan un derecho subjetivo pero que tampoco se trata de intereses difusos o colectivos, lo que constituye una ventaja frente a la previsión exclusiva de procedencia en contra de la afectación de intereses difusos. En este sentido, la legitimación a través del interés legítimo es más amplia que la que se lograría con la sola defensa de los intereses difusos y colectivos."

"a) No es un mero interés por la legalidad de la actuación de la autoridad, requiere la existencia de un interés personal, individual o colectivo que, de prosperar la acción, se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante.

"b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad frente a otro.

"c) Debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole. Lo contrario es la acción popular, en la cual no se requiere afectación alguna a la esfera jurídica.

"d) Los titulares tienen un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento, cuando con motivo de la persecución de fines de carácter general incidan en el ámbito de ese interés propio.

"e) Se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial e hipotético; en suma, es un interés jurídicamente relevante.

"f) La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado."

Sobre los Derechos de las Víctimas

SIN TEXTO



VI. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN LA LEGISLACIÓN INTERAMERICANA, EUROPEA, CONSTITUCIONAL Y NACIONAL

La evolución de los derechos de las víctimas en los últimos años ha sido significativo, ya que ha pasado de ser un actor inminentemente civil para la reclamación de los daños sufridos a ser coadyuvante activo y determinante para el éxito de las investigaciones y sentencias condenatorias contra los responsables.

Por lo anterior se considera prudente evidenciar los derechos de las víctimas desde (i) los instrumentos y documentos oficiales internacionales, (ii) el acceso a la justicia, (iii) los derechos de las víctimas en la unión europea, (iv) en de la recomendación 14 del 2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (v) la resolución del Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y (vi) los derechos de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal.

Son derechos de las víctimas en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, particularmente los siguientes:

Derecho reconocido	Fundamento
Inherentes a la persona	
A que se respete su vida.	Convención de Belém do Pará Art. 4 Declaración Universal de los Derechos Humanos Convención sobre los Derechos del Niño.
A que se respete su integridad física, psíquica y moral.	Convención de Belém do Pará Art. 4 Declaración Universal de los Derechos Humanos Convención sobre los Derechos del Niño.
A la libertad y a la seguridad personales.	Convención de Belém do Pará Art. 4 Declaración Universal de los Derechos Humanos Convención sobre los Derechos del Niño.
A no ser sometida a torturas.	Convención de Belém do Pará Art. 4 Declaración Universal de los Derechos Humanos Convención sobre los Derechos del Niño.
A que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia.	Convención de Belém do Pará Art. 4 Declaración Universal de los Derechos Humanos

SIN TEXTO



	Convención sobre los Derechos del Niño.
A igualdad de protección ante la ley y de la ley.	Convención de Belém do Pará Art. 4 Declaración Universal de los Derechos Humanos Convención sobre los Derechos del Niño.
Interés superior del niño.	Convención sobre los Derechos del Niño. Art. 3
Derechos Judiciales	
A un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.	Convención de Belém do Pará Art. 4 Declaración Universal de los Derechos Humanos Convención sobre los Derechos del Niño.
Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.	Convención de Belém do Pará Art. 7
No doble victimización.- El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no dé lugar a un nuevo trauma.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VI. Tratamiento de las Víctimas
A disponer de recursos. Las víctimas deben contar con los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VII. A Disponer de Recursos
Acceso igual y efectivo a la justicia.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VII. A Disponer de Recursos
Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005

SIN TEXTO



	VII. A Disponer de Recursos
Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VII. A Disponer de Recursos
Notificación a las víctimas y sus familiares de la investigación para ejercer su derecho a aportar pruebas	Protocolo de Estambul ¶ 115 Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Art. 4
A conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, Violaciones Sexuales y Homicidios de Mujeres, los progresos y resultados de la investigación y la suerte de la persona.	Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Art. 24
Contar con medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas	Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Art. 24
En caso de fallecimiento, contar con medidas apropiadas para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.	Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Art. 24
Conocer a través de mecanismos públicos y privados, información sobre todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario;	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VIII. Acceso a la Justicia.
Contar con medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VIII. Acceso a la Justicia.

ORIGINAL TEXT

THE CHAIR
ACCEPTED
RECEIVED
FRI

víctimas.	
Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VIII. Acceso a la Justicia.
Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o por violaciones graves del derecho internacional.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VIII. Acceso a la Justicia.
Además del acceso individual a la justicia, procurar establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VIII. Acceso a la Justicia.
Reparación del daño.- Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Art. 24
La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.

SIN TEXTO



reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.	
Procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Los Estados ejecutarán, con respecto a las reclamaciones de las víctimas, las sentencias de sus tribunales que impongan reparaciones a las personas o entidades responsables de los daños sufridos, y procurarán ejecutar las sentencias extranjeras válidas que impongan reparaciones con arreglo al derecho interno y a las obligaciones jurídicas internacionales. Con ese fin, los Estados deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que obliguen a reparar daños.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, en forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.

SIN TEXTO

ESTADO
LIBRE
DE
DIOCALD
CORTE DE JU
-DETANIA DE A
PRIMER

humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.	
La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales, las cuales deben comprender al menos: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.

SIN



ESTADOS UNIDOS
PODER JUD
SUPREMA CC
SECRE

personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones	
La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. /147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. /147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. /147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 IX. Reparación de los daños sufridos.
Especialmente en la investigación de los delitos	
Investigar con prontitud e imparcialidad	Protocolo de Estambul 3 y 73 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. /147 del 16 de diciembre de 2005 Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Art. 2

SIN TEXTO



b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar violencia contra las victimas	Convención de Belém Do Pará Art. 7
Principios fundamentales de la investigación. Competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad	Protocolo de Estambul ¶ 73 y 106 a 117 Directrices sobre la Función de los Fiscales
Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales.	Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Art. 2
En caso de problemas por involucramiento de la autoridad o incapacidad de la misma se debe contar con una Comisión de investigación independiente, con neutralidad y autonomía.	Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Art. 2 y 5 Protocolo de Estambul 74 y 84 art 9 PREPIEEASA)
Determinación de la comisión con criterios técnicos	Protocolo de Estambul 106 a 117
Selección de los miembros con imparcialidad	Protocolo de Estambul 110
La autoridad investigadora debe contar con poderes para obtener toda la información necesaria para la investigación y estará obligada a hacerlo.	Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Art. 2
Los funcionarios encargados de realizar la investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios para hacerlo en forma eficaz, y tendrán también facultades para obligar a los funcionarios presuntamente implicados en torturas o malos tratos a comparecer y prestar testimonio. Lo mismo regirá para los testigos. A tal fin, la autoridad investigadora podrá citar a testigos, incluso a los funcionarios presuntamente implicados, y ordenar la presentación de pruebas.	Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Art. 2

SIN TEXTO



La investigación tendrá como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado.	Art9 PRIEIDCSEE
Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos	Art9 PRIEIDCSEE
Las presuntas víctimas y los testigos y quienes realicen la investigación, así como sus familias, serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que pueda surgir de resultados de la investigación. Los presuntos implicados en torturas o malos tratos serán apartados de todos los puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los reclamantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las investigaciones	Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Art. 3
Derechos de asistencia	
Deber de dar asistencia compasiva	Protocolo de Estambul 57
Consentimiento informado	Protocolo de Estambul 63 – 64
Confidencialidad	Protocolo de Estambul
Doble obligación de los profesionales de la salud	Protocolo de Estambul 66 – 73 Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Art.6
Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas	Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas No. 147 del 16 de diciembre de 2005 VI. Tratamiento de las víctimas.

STANLEY



para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias	
Derecho a contar con Códigos Éticos	
El Estado deberá con contar con Códigos éticos para: Médicos Funcionarios de la Procuración de Justicia Policía Apoyo a víctimas.	Protocolo de Estambul

LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Jorge Ulises Carmona Tinoco² en el artículo denominado "Los estándares del acceso a la justicia y del debido proceso, en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos."³ Escribe sobre acceso a la justicia debido proceso especificando que:

EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE.

En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el derecho de acceso a la justicia se encuentra expresado, aún cuando sin esa denominación, desde la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en el artículo XVIII, enunciado como "Derecho de Justicia". Dicho precepto señala:

"Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente."

La primera parte del artículo citado se refiere al acceso a los órganos jurisdiccionales ordinarios para hacer valer todo tipo de derechos (civiles, familiares, penales, mercantiles, administrativos, laborales, entre otros), mientras que la segunda parte, tiene por objeto la protección específica de los derechos

² Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

³ El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: su jurisprudencia sobre debido proceso, DESC, libertad personal y libertad de expresión, Tomo II, 2004.

IN FERTO

ESTADOS UNIDOS
REPUBLICA
DE
COLOMBIA

fundamentales expresados a nivel constitucional, contra actos de autoridad, mediante la existencia de un instrumento de tramitación sencilla y breve.

De esta manera, el acceso a la justicia se afirma como un derecho fundamental con respecto a las diversas ramas jurídicas que integran un ordenamiento y, en tal carácter, cuando fuere transgredido o inobservado, debe ser susceptible de tutela jurídica vía el procedimiento sencillo y breve enunciado, el cual, a su vez, deberá estar disponible a toda persona a quien se conculque tal derecho.

Habría que agregar también el derecho de toda persona privada de su libertad a acceder a un juez, con el fin de que dicho funcionario verifique la legalidad de la detención, pudiendo ser aquella puesta en libertad si no se actuó con apego a la ley (artículo XXV), así como el derecho de toda persona acusada de un delito a ser oída en forma imparcial y pública, por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes (artículo XXVI).

La Comisión ha señalado que las leyes que permitan la detención prolongada sin mediar orden judicial y sin beneficio del asesoramiento jurídico, son prima facie violatorias del derecho al proceso regular, exigido por los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana.⁴

Estos derechos son recogidos y detallados por la Convención Americana, como vemos en los párrafos siguientes, que además prevé entre sus propias pautas de interpretación señaladas en su artículo 29.d, que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

1. La noción de acceso a la justicia y los deberes estatales derivados de ella.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, es más específica y prolífica respecto al tema que nos ocupa. En primer término, habría que mencionar el artículo 8.1, que se refiere según su propia denominación a las Garantías Judiciales, en el que se señala:

4 Cfr. CIDH. Resolución No. /85, Caso No. 9265,

1 de julio de 1985, párrafo 10.

SIN-TEXTO



8.1. "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

La Convención, como puede observarse, hace eco de lo que señala la Declaración Americana sobre el acceso a los tribunales. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el artículo 8.1 consagra el derecho de acceso a la justicia.

La Corte ha señalado el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, derivado del artículo 1 de la Convención.⁵

De acuerdo con la Corte Interamericana, la Convención garantiza a toda persona el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos, recayendo sobre los Estados Partes los deberes de prevenir, investigar, identificar y sancionar a los autores intelectuales y encubridores de violaciones de los derechos humanos.⁶ En contrapartida, los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.⁷

El acceso a la justicia no es sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado, sino que, además, tal acceso debe ser efectivo, lo cual no se cumple si quienes participan en el proceso no pueden hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales por concepto de tasas de justicia, multas u honorarios desproporcionados regulados

5 Cfr. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, párrafos 23 y 24. El artículo 1.1 de la Convención señala: "Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

6 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional, Sentencia de Fondo, 29 de septiembre de 1999, párrafo 123; Caso Sentencia sobre Reparaciones, 22 de enero de 1999, párrafo 65.

7 Cfr. Sentencia de Fondo, 28 de Noviembre de 2002, párrafo 50.

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
YODER JI
PREMA
SECR

por la Ley, que pueden ser un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia.⁸

2. El acceso a la justicia de las víctimas y de sus familiares en casos de delitos y de violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, las garantías judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Convención, son también el fundamento para garantizar a las víctimas de conductas delictivas, el derecho a que éstas sean efectivamente investigadas,⁹ a que se siga un proceso contra los responsables de los ilícitos ante un tribunal independiente e imparcial en un plazo razonable,¹⁰ a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que hayan sufrido. Tal interpretación resulta de armonizar el mencionado artículo 8 con el artículo 29 de la Convención, inciso c, que establece entre las pautas para interpretar la Convención Americana, la de no excluir otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que derivan de la forma democrática representativa de gobierno.¹¹

Esta interpretación ha sido útil también para dejar en claro que los familiares de una persona desaparecida son también considerados como víctimas y tiene el derecho de acceso a la justicia para que la conducta sea efectivamente investigada, sancionados sus responsables y que les sea brindada una reparación adecuada.¹²

La investigación que debe llevar a cabo el Estado, ya sea de cualquier conducta delictiva, ya de violaciones a los derechos humanos, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.¹³

8Cfr. Caso Sentencia de Fondo, 28 de Noviembre de 2002, párrafos 54 a 56.

9 Véase CIDH. Informe No. 19/03, Petición 11.725, Acuerdo de Cumplimiento, Chile, 6 de marzo de 2003, en el cual como forma de cumplimiento de un Informe Publicado, el Estado se comprometió a reactivar y continuar una investigación penal.

10Cfr. Caso de la " y otros(y otros), Sentencia de Fondo, 8 de marzo de 1998, párrafo 155.

11 Cfr. Caso Sentencia de Fondo, 24 de enero de 1998, párrafos 96 y 97.

12Cfr. Caso Sentencia de Fondo, 16 de agosto de 2000, párrafo 130.

13 Cfr. Caso , Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párrafo 177.

SIN TEXTO



10ER JUDICIAL
REMA, CORTE D
SECRETARÍA D
PRIM

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos en general, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación.¹⁴

3. La falta de acceso a la justicia y la impunidad.

La falta de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, esto es, la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, deviene en impunidad, misma que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.¹⁵

LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN QUE DEBEN SER OBSERVADAS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA.

Los aspectos señalados por la Convención enfatizan la exigencia de que el acceso a la justicia no se traduce únicamente en un mero acceso formal a la jurisdicción, sino que involucra una serie de parámetros sustantivos (competencia, independencia e imparcialidad de los órganos de impartición de justicia y de debido proceso, incluyendo el plazo razonable), los cuales están estrechamente vinculados al deber Estatal de garantizar la no discriminación de ningún tipo en el libre y pleno ejercicio de tales derechos y a la igualdad ante la ley (artículos 1.1 y 24 de la Convención, respectivamente).¹⁶

En efecto, para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. **La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses.** Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de

¹⁴Cfr. Caso de los _____ y otros(_____ y otros), Sentencia de Fondo, 19 de noviembre de 1999, párrafo 227.

¹⁵Cfr. Casc _____ Sentencia de Fondo, 6 de diciembre de 2001, párrafo 56.

¹⁶ El artículo 1.1. señala el deber genérico por parte de los Estados de respetar los derechos y el artículo 24 señala de manera expresa: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley."

PLAIN TEXT

SECRET
SUPREMACY
SECRET

un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.¹⁷

Por lo que se refiere al marco general de los deberes del Estado hacia los derechos humanos, no hay que perder de vista que la obligación primaria de todo Estado consiste en respetar los derechos, tal como lo establece de manera expresa la primera parte del artículo 1.1 de la Convención Americana, en la parte que señala los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos.

Si fuere el caso de que el ejercicio de los derechos señalados no estuviere garantizado por el Estado al momento de ratificar la Convención Americana, ya sea mediante disposiciones legislativas o de otro tipo (por ejemplo, administrativas o jurisprudenciales), el artículo 2 de dicho instrumento internacional señala el deber de adoptar las medidas necesarias, del carácter que fueren, para hacer efectivos los derechos, en el marco de sus procedimientos constitucionales y atento a las disposiciones de la propia Convención.

Por ejemplo, un procedimiento de titulación de tierras ocupadas por grupos indígenas no está claramente regulado, si no es un procedimiento efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras comunales indígenas. La ausencia de dicho procedimiento obliga al Estado no sólo a diseñarlo y establecerlo, sino también a hacerlo acorde con el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de tales grupos indígenas, mientras esto no se lleve a cabo, tales omisiones constituyen una violación al artículo 25, con relación a los artículos 1.1 y 2 de la propia Convención.¹⁸

LOS PARÁMETROS DEL ACCESO A UN RECURSO SENCILLO, RÁPIDO Y EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Otro ángulo del acceso a la justicia, está constituido por el deber del Estado para establecer un recurso sencillo, rápido y efectivo, con que pueda contar toda persona ante órganos jurisdiccionales competentes, para la garantía de los derechos humanos previstos en la Constitución, la ley o la Convención, en los términos del artículo 25 de ésta última. Además, que el Estado garantice que dichos órganos tengan las atribuciones para decidir el recurso planteado y que la resolución favorable a la persona será acatada por las autoridades correspondientes.

¹⁷ Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, párrafo 119.

¹⁸ Cfr. Caso de la Comunidad

, Sentencia de Fondo, 31 de agosto de 2001, párrafo 123 a 139.

SIN TEXTO



La Corte ha señalado que el artículo 25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la justicia, que se concreta en la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, no sólo de aquellos contenidos en la Convención, sino también de los reconocidos en la Constitución y en la Ley.¹⁹ El Estado debe asegurar, en su ordenamiento jurídico interno, que toda persona tenga acceso, sin restricción alguna, a dicho recurso sencillo y efectivo que la ampare en la determinación de sus derechos, independientemente de su estatus migratorio,²⁰ de ahí que **el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio.**²¹

LA OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA.

En los términos del artículo 25 de la Convención, la Corte ha establecido reiteradamente que la existencia de este tipo de garantías **"constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención".**²²

En este punto en particular la justicia se ve obstruida si las autoridades en casos de violaciones a los derechos humanos, utilizan mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.²³

En el mismo sentido, **la existencia de impedimentos fácticos o legales** (como una ley de amnistía) **para acceder a información relevante en relación con los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental, constituye una abierta violación del derecho** establecido en el artículo 25 e impide contar con recursos de la jurisdicción interna que permitan la protección judicial de los derechos fundamentales establecidos en la Convención, la Constitución y las leyes.²⁴ Por lo tanto, las leyes de amnistía pueden dejan

¹⁹Cfr. Caso Sentencia de Fondo, 28 de Noviembre de 2002, párrafo 52.

²⁰ Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, párrafo 107.

²¹ Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, párrafo 121.

²²Cfr. Caso Sentencia de Fondo, 25 de noviembre de 2000, párrafo 191.

²³Cfr. Caso Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafos 180 y 182.

²⁴ Cfr. CIDH. Informe No. 136/99, Caso 10.488, J.J.; Segundo Montes, S.J. et. al., El Salvador, 22 de diciembre de 1999, párrafo 225.

**SIN
TEXTO**

ESTADOS UNIDOS
DE JUDICI/



TEMA CORTE
SECRETARIA
PR.

desamparadas a las víctimas de serias violaciones a los derechos humanos, y las privan del derecho a acceder a la justicia.²⁵

Por otro lado, el hecho de que el Estado promueva la presentación de denuncias civiles y penales contra una persona o su familia, así como a sus allegados y abogados, en virtud de las cuales se restringió la libertad de algunos y se desalentó la permanencia de otros en el país, reflejan un cuadro de persecución y denegación de justicia, violatorio del artículo 25.²⁶

Por último, hay que enfatizar que cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana.²⁷

LAS REGLAS BÁSICAS PARA LA TRAMITACIÓN Y DECISIÓN DEL RECURSO SENCILLO Y BREVE, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA AL MISMO.

El artículo 25 ha sido interpretado por la Corte Interamericana en concordancia con el artículo 8.1, todo ello a la luz del artículo 1 de la Convención, de manera que un Estado, a efecto de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción, el libre y pleno ejercicio de los derechos previstos en la Convención, no sólo tiene el **deber de proporcionar recursos judiciales adecuados y efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos**, sino que tales **recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso**, esto es, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, y con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable.²⁸ Esto se ve complementado por la responsabilidad del Estado de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales.²⁹

Por otra parte, el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 25 no se agota con el libre acceso y desarrollo del recurso judicial. Es necesario que **el órgano interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que,**

25 Cfr. CIDH. Informe No. 61/01, Caso 11.771, :

Chile, 16 de abril de 2001, párrafo 47; véanse

también los Informes 28/92 (Argentina), 29/92 (Uruguay), Informe N° 36/96, Caso 10.843 (Chile), párrafo 49, Informe 1/99, caso 10.480 (El Salvador), párrafo 107.

26 Cfr. Caso

Sentencia de Fondo, 6 de febrero de 2001, párrafo 141.

27 Cfr. Caso

Sentencia de Fondo, 28 de Noviembre de 2002, párrafo 52.

28 Cfr. Caso

cepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 91.

29 Cfr. Caso de los "

y otros), Caso de los "

y otros),

Sentencia de Fondo, 19 de noviembre de 1999, párrafo 237.

STANLEY

DEPARTAMENTO
PREMIOS COSTA D
SECRETARIA D
PRIM

precisamente, da origen al recurso judicial.³⁰ La decisión final razonada sobre el recurso judicial, es el fundamento y el objeto final del derecho al recurso judicial reconocido por la Convención Americana en el artículo 25, que estará también revestido por indispensables garantías individuales y obligaciones estatales (artículos 8 y 1.1).³¹

En el mismo sentido, la propia lógica interna de todo recurso judicial --también el del artículo 25-- indica que el decisor debe establecer concretamente la verdad o el error de la alegación del reclamante. El reclamante acude al órgano judicial alegando la realidad de una violación de sus derechos, y el órgano en cuestión, tras un procedimiento de prueba y de debate sobre esa alegación, debe obligatoriamente decidir si el reclamo es fundado o infundado. De lo contrario, el recurso judicial devendría inconcluso.³² No obstante, la protección judicial que reconoce la Convención no comprende la garantía de un resultado favorable. En sí mismo, un resultado negativo emanado de un juicio justo no constituye una violación de la Convención.³³

La Comisión ha señalado que la propia norma del artículo 25.2.a establece expresamente el derecho de aquel que acude al recurso judicial a que "la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso". Decidir sobre los derechos implica efectuar una determinación entre los hechos y el derecho --con fuerza legal-- que recaiga y que trate sobre un objeto específico.³⁴

El Estado tiene obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el artículo 25 y al deber derivado del artículo 2 de la Convención. En este sentido la inexecución de sentencias o su ejecución tardía (por ejemplo, después de casi ocho años), acarrea la violación del derecho a la protección judicial por parte del Estado.³⁵

30CIDH. Informe Nº: 97, Caso 10.087,

Argentina, 30 de septiembre de 1997, párrafo 71.

31CIDH. Informe Nº: 97, Caso 10.087

Argentina, 30 de septiembre de 1997, párrafo 71.

32CIDH. Informe Nº: 97, Caso 10.087,

Argentina, 30 de septiembre de 1997, párrafo 73.

33CIDH. Informe No. 1/96, Caso 11.673, Argentina, 15 de octubre de 1996, párrafo 47.

34CIDH. Informe Nº: 97, Caso 10.087,

Argentina, 30 de septiembre de 1997, párrafo 77.

35Cfr. Caso Cinco Pensionistas, Sentencia Caso Cinco Pensionistas, Sentencia de 28 de febrero de 2003, párrafo 138, 141 y 167.

SIN TEXTO

LA ESTIMA
PODER
SUPRE
SI

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EUROPA

Por su parte la Unión Europea durante el Consejo de la Unión Europea del 15 de marzo de 2001 aprobó un instrumento en el que se hace un reconocimiento de los derechos mínimos de las víctimas del delito y que hoy en día se ven reflejados en la mayoría de los protocolos, directrices y manuales de investigación y atención a víctimas en los Estados integrantes. El documento referido señala:

"Decisión marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31 y la letra b) del apartado 2 de su artículo 34,

Vista la iniciativa de la República Portuguesa(1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),

Considerando lo siguiente:

(1) De acuerdo con el plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y en particular con el punto 19 y la letra c) del punto 51 del mismo, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado se debe abordar la cuestión del apoyo a las víctimas mediante un estudio comparativo de los sistemas de compensación para las víctimas y evaluar la viabilidad de una actuación a escala de la Unión Europea.

(2) El 14 de julio de 1999, la Comisión presentó al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social una comunicación titulada "Víctimas de delitos en la Unión Europea - Normas y medidas". El Parlamento Europeo aprobó el 15 de junio de 2000 una resolución relativa a la comunicación de la Comisión.

(3) Las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, en particular su punto 32, establecen que deberán elaborarse normas mínimas sobre la protección de las víctimas de los delitos, en particular sobre su acceso a la justicia y su derecho a ser indemnizadas por los daños sufridos, también por lo que respecta a los gastos judiciales. Además, deberán

SIN TEXTO



crearse programas nacionales para financiar medidas, tanto públicas como no gubernamentales, de asistencia y protección de las víctimas.

(4) Conviene que los Estados miembros aproximen sus disposiciones legales y reglamentarias en la medida necesaria para realizar el objetivo de ofrecer a las víctimas de delitos un elevado nivel de protección, con independencia del Estado miembro en que se encuentren.

(5) Es importante concebir y tratar las necesidades de la víctima de forma integrada y articulada, evitando soluciones parciales o incoherentes que puedan acarrear una victimación secundaria.

(6) Por esta razón, las disposiciones de la presente Decisión marco no se limitan a atender a los intereses de la víctima en el marco del procedimiento penal en sentido estricto. Engloban asimismo algunas medidas de asistencia a las víctimas, antes o después del proceso penal, encaminadas a paliar los efectos del delito.

(7) Las medidas de ayuda a las víctimas de delitos, y en particular las disposiciones en materia de indemnización y de mediación, no afectan a las soluciones que son propias del proceso civil.

(8) Es necesario armonizar las normas y prácticas en lo que respecta al estatuto y a los principales derechos de la víctima, prestando especial atención al respeto de su dignidad, a su derecho a declarar y ser informada, a comprender y ser comprendida, a ser protegida en las diversas fases de las actuaciones y a que se tenga en cuenta la desventaja de residir en un Estado miembro distinto del de la comisión del delito.

(9) Las disposiciones de la presente Decisión marco, sin embargo, no obligan a los Estados miembros a garantizar a las víctimas un trato equivalente al de las partes en el proceso.

(10) Es importante la intervención de servicios especializados y organizaciones de apoyo a la víctima antes, durante y después del proceso penal.

(11) Es necesario que las personas que están en contacto con la víctima reciban una formación adecuada y suficiente, algo fundamental tanto para la víctima como para la realización de los objetivos del proceso.

(12) Conviene utilizar las redes de puntos de contacto existentes en los Estados miembros, ya sea dentro del sistema judicial, ya en el sector de las organizaciones de apoyo a la víctima.

SIN TEXTO



UNDER JUD
REMA CO
SECRET

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO

Artículo 1

Definiciones

A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:

- a) "víctima": la persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro;
- b) "organización de apoyo a la víctima": la organización no gubernamental constituida legalmente en un Estado miembro y cuyas actividades de apoyo a las víctimas de delitos, sean gratuitas y ejercidas en condiciones adecuadas, sean complementarias de la actividad del Estado en este ámbito;
- c) "proceso penal": el prescrito en la legislación nacional aplicable;
- d) "actuaciones": en sentido lato, además del proceso penal, todos los contactos que la víctima establezca, como tal, con cualquier autoridad, servicio público u organización de apoyo a la víctima en relación con su causa, antes, durante o después del proceso penal;
- e) "mediación en causas penales": la búsqueda, antes o durante el proceso penal, de una solución negociada entre la víctima y el autor de la infracción, en la que medie una persona competente.

Artículo 2

Respeto y reconocimiento

1. Los Estados miembros reservarán a las víctimas un papel efectivo y adecuado en su sistema judicial penal. Seguirán esforzándose por que las víctimas sean tratadas durante las actuaciones con el debido respeto a su dignidad personal, y reconocerán sus derechos e intereses legítimos en particular en el marco del proceso penal.
2. Los Estados miembros velarán por que se brinde a las víctimas especialmente vulnerables un trato específico que responda de la mejor manera posible a su situación.

SIN TEXTO



Artículo 3

Audición y presentación de pruebas

Los Estados miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que sus autoridades sólo interroguen a la víctima en la medida necesaria para el proceso penal.

Artículo 4

Derecho a recibir información

1. Los Estados miembros garantizarán que la víctima tenga acceso, en particular desde el primer contacto con las autoridades policiales, por los medios que consideren adecuados y, cuando sea posible, en lenguas de comprensión general, a la información pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información incluirá, como mínimo:

- a) el tipo de servicios u organizaciones a los que puede dirigirse para obtener apoyo;
- b) el tipo de apoyo que puede recibir;
- c) el lugar y el modo en que puede presentar una denuncia;
- d) las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquéllas;
- e) el modo y las condiciones en que podrá obtener protección;
- f) la medida y las condiciones en que puede acceder a:

Asesoramiento jurídico, o

Asistencia jurídica gratuita, o

Cualquier otro tipo de asesoramiento,

Siempre que, en los casos contemplados en los incisos i) y ii), la víctima tenga derecho a ello;

- g) los requisitos para tener derecho a una indemnización;

**SIN
TEXTO**



**JUDICIA
LA CORTE D
SECRETARÍA E
PERFUMIA**

h) si reside en otro Estado, los mecanismos especiales de defensa de sus derechos que puede utilizar.

2. Los Estados miembros garantizarán que la víctima que lo solicite sea informada:

a) del curso dado a su denuncia;

b) de los elementos pertinentes que le permitan, en caso de enjuiciamiento, seguir el desarrollo del proceso penal relativo al inculpado por los hechos que la afectan, salvo en casos excepcionales en que el correcto desarrollo de la causa pueda verse afectado;

c) de la sentencia del tribunal.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar, al menos en el caso de que pueda existir un riesgo para la víctima, que en el momento de la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada por la infracción, se pueda decidir, en caso necesario, informar de ello a la víctima.

4. En la medida en que un Estado miembro transmita por iniciativa propia la información a que se refieren los apartados 2 y 3, deberá garantizar a la víctima el derecho a optar por no recibir dicha información, salvo en el caso en que su envío sea obligatorio en el marco del proceso penal de que se trate.

Artículo 5

Garantías de comunicación

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para reducir cuanto sea posible las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión y a la participación de la víctima en las fases importantes del proceso penal, cuando ésta sea testigo o parte en las actuaciones, en términos comparables a los aplicables al procesado.

Artículo 6

Asistencia específica a la víctima

Los Estados miembros garantizarán que, de forma gratuita cuando esté justificado, la víctima disponga de asesoramiento con arreglo al inciso iii) de la letra f) del apartado 1 del artículo 4 sobre su papel en las actuaciones, y, si procede, de

SEN

SECRET

DDER 38
PREMA 12
SECT 1

asistencia jurídica con arreglo al inciso ii) de la letra f) del apartado 1 del artículo 4 cuando pueda ser parte en el proceso penal.

Artículo 7

Gastos sufragados por la víctima en relación con un proceso penal

Los Estados miembros, con arreglo a las disposiciones nacionales aplicables, darán a la víctima, cuando ésta sea parte o testigo, la posibilidad de que le sean reembolsados los gastos que le haya ocasionado su participación legítima en el proceso penal.

Artículo 8

Derecho a la protección

1. Los Estados miembros garantizarán un nivel adecuado de protección a las víctimas y, si procede, a sus familiares o personas en situación equivalente, por lo que respecta a su seguridad y a la protección de su intimidad, siempre que las autoridades competentes consideren que existe un riesgo grave de represalias o claros indicios de una intención clara de perturbar su vida privada.
2. Para ello, y no obstante lo dispuesto en el apartado 4, los Estados miembros garantizarán que, en caso necesario, sea posible adoptar, en el marco de un proceso judicial, las medidas adecuadas para proteger la intimidad o la imagen física de la víctima y de sus familiares o de las personas en situación equivalente.
3. Los Estados miembros velarán además por que, en las dependencias judiciales, pueda evitarse el contacto entre víctima y procesado, salvo que el proceso penal lo requiera. A tal fin, si ha lugar, los Estados miembros dispondrán progresivamente lo necesario para que las dependencias judiciales estén provistas de espacios de espera reservados a las víctimas.
4. Los Estados miembros garantizarán, cuando sea necesario proteger a las víctimas, y sobre todo a las más vulnerables, de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, que éstas puedan, por resolución judicial, testificar en condiciones que permitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio adecuado compatible con los principios fundamentales de su Derecho.

SIN TÍTULO



7. JUDICIAL
1. CORTE D.
2. ETARIA D.
PRIM.

Artículo 9

Derecho a indemnización en el marco del proceso penal

1. Los Estados miembros garantizarán a la víctima de una infracción penal el derecho a obtener en un plazo razonable y en el marco del proceso penal una resolución relativa a la indemnización por parte del autor de la infracción, salvo cuando la legislación nacional disponga que, para determinados casos, la indemnización se efectúe por otra vía.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas pertinentes para propiciar que el autor de la infracción indemnice a la víctima adecuadamente.
3. Salvo en caso de necesidad absoluta impuesta por el proceso penal, los objetos restituibles pertenecientes a la víctima y aprehendidos durante las actuaciones se devolverán a la víctima sin demora.

Artículo 10

Mediación penal en el marco del proceso penal

1. Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida.
2. Los Estados miembros velarán por que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las causas penales.

Artículo 11

Víctimas residentes en otro Estado miembro

1. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes estén en condiciones de tomar las medidas necesarias para paliar las dificultades derivadas del hecho de que la víctima resida en un Estado miembro distinto de aquél en que se haya cometido la infracción, en especial en lo que se refiere al desarrollo de las actuaciones. A tal fin, dichas autoridades deberán sobre todo estar en condiciones de:

- decidir si la víctima puede prestar declaración inmediatamente después de cometerse la infracción,

SIN TEXTO



- recurrir en la mayor medida posible, para la audición de las víctimas residentes en el extranjero, a las disposiciones sobre videoconferencia y conferencia telefónica previstas en los artículos 10 y 11 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000(3).

2. Los Estados miembros velarán por que la víctima de una infracción cometida en un Estado miembro distinto de aquél en que reside pueda presentar la denuncia ante las autoridades competentes de su Estado de residencia en caso de que no haya podido hacerlo en el Estado miembro en el que se cometió la infracción o, si se trata de una infracción grave, en caso de que haya optado por no hacerlo.

La autoridad competente ante la que se haya presentado la denuncia, en la medida en que ella misma no ejerza su competencia a este respecto, la transmitirá sin demora a la autoridad competente del territorio en que se haya cometido la infracción. Esta denuncia se tramitará con arreglo al Derecho interno del Estado en el que se haya cometido la infracción.

Artículo 12

Cooperación entre Estados miembros

Los Estados miembros deberán apoyar, desarrollar y mejorar la cooperación entre sí para facilitar la defensa más eficaz de los intereses de la víctima en el proceso penal, ya mediante redes directamente vinculadas al sistema judicial, ya mediante vínculos entre organizaciones de apoyo a la víctima.

Artículo 13

Servicios especializados y organizaciones de apoyo a la víctima

1. Los Estados miembros fomentarán, en el contexto de las actuaciones, la intervención de servicios de apoyo a la víctima que organicen la acogida inicial de ésta y le presten apoyo y asistencia posteriormente, ya sea mediante personal especialmente preparado de los servicios públicos nacionales, ya sea mediante el reconocimiento y la financiación de organizaciones de apoyo a la víctima.

2. Los Estados miembros propiciarán la participación en las actuaciones de dicho personal o de las organizaciones de apoyo a la víctima, en particular por lo que respecta a:

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
DER JUD
REMA C
SECRE

- a) la transmisión de información a la víctima;
- b) la prestación de apoyo a la víctima en función de sus necesidades inmediatas;
- c) el acompañamiento de la víctima, en caso necesario y siempre que resulte posible, durante el proceso penal;
- d) la asistencia a la víctima, cuando ésta lo solicite, una vez que haya finalizado el proceso penal.

Artículo 14

Formación de las personas que intervienen en las actuaciones o que tienen otro tipo de contacto con la víctima

1. Los Estados miembros propiciarán, a través de sus servicios públicos o mediante la financiación de organizaciones de apoyo a la víctima, iniciativas en virtud de las cuales las personas que intervienen en las actuaciones o que tienen otro tipo de contacto con la víctima reciban la adecuada formación, con especial atención a las necesidades de los grupos más vulnerables.

2. El apartado 1 se aplicará en especial a los agentes de policía y a los profesionales del derecho.

Artículo 15

Condiciones prácticas relativas a la situación de la víctima durante las actuaciones

1. Los Estados miembros propiciarán la creación gradual, en el marco de las actuaciones en general y especialmente en los lugares en los que puede incoarse el proceso penal, de las condiciones necesarias para tratar de prevenir la victimación secundaria o evitar que la víctima se vea sometida a tensiones innecesarias. Para ello velarán en particular por que se dé una acogida correcta a las víctimas en un primer momento y por que se creen en dichos lugares condiciones adecuadas a la situación de la víctima.

2. A efectos de la aplicación del apartado 1, los Estados miembros tendrán especialmente en cuenta los medios de que disponen las dependencias judiciales, comisarías de policía, servicios públicos y organizaciones de apoyo a la víctima.

SIN TEXAS

ORDER
UPREMA C
SECRE

Artículo 16

Ámbito de aplicación territorial

La presente Decisión marco se aplicará a Gibraltar.

Artículo 17

Aplicación

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado en la presente Decisión marco:

- en lo que se refiere al artículo 10, a más tardar el 22 de marzo de 2006,
- en lo que se refiere a los artículos 5 y 6, a más tardar el 22 de marzo de 2004,
- en lo que se refiere a las demás disposiciones, a más tardar el 22 de marzo de 2002.

Artículo 18

Evaluación

Los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión, en las fechas establecidas en el artículo 17, el texto de las disposiciones que incorporen al ordenamiento jurídico nacional las obligaciones impuestas por la presente Decisión marco. El Consejo evaluará, en el plazo de un año consecutivo a dichas fechas, las medidas adoptadas por los Estados miembros en aplicación de lo estipulado en la presente Decisión marco; se basará para ello en un informe elaborado por la Secretaría General a partir de la información recibida de los Estados miembros y en un informe escrito presentado por la Comisión.

Artículo 19

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 2001.

Por el Consejo

SIN TEXTO



El Presidente

- (1) DO C 243 de 24.8.2000, p. 4.
- (2) Dictamen emitido el 12 de diciembre de 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).
- (3) DO C 197 de 12.7.2000, p. 1."

VII. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS HASTA EL AÑO 2008 SEGÚN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 14/2007

Los derechos de las Víctimas en la Constitución Mexicana y en la legislación antes de la reforma de 2008 fueron analizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 14 de 2007, destacando los siguientes elementos:

"RECOMENDACIÓN GENERAL No. 14 SOBRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS"

México, D. F., a 27 de marzo de 2007

SEÑORAS Y SEÑORES PROCURADORES GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE JUSTICIA MILITAR Y DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE SALUD FEDERAL, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES O SUPREMOS TRIBUNALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

La atención a las víctimas fue impulsada, en sus inicios, por organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y de violencia familiar, y a este esfuerzo se sumó el de las instituciones públicas, principalmente las procuradurías de justicia, en las que ha recaído básicamente la atención institucional de las víctimas.

En este sentido, si bien es cierto que a partir de las reformas de 1993 y 2000 al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas, también lo es que en la realidad el ejercicio de tales derechos no se cumple a cabalidad; entre otras razones por la ausencia de una política pública de colaboración institucional uniforme y coordinada entre los diversos órdenes de gobierno, e incluso entre las distintas dependencias de cada uno de ellos, que permita el impulso de acciones integrales a fin de procurar que las víctimas reciban atención y apoyo jurídico, médico y psicológico; en ese

SIN TEXTO



sentido se ha detectado que el personal que tiene contacto con víctimas de delitos, como lo es el adscrito a las agencias del Ministerio Público (elementos de policía ministerial, peritos, médicos), y a los servicios de salud (en las salas de urgencia) carece de capacitación para atender a personas en crisis; además, en ocasiones su actuar no se dirige a salvaguardar la legalidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, ya que minimizan el evento, cuestionan a la víctima, la descalifican, ignoran, trivializan el evento o argumentan pesadas cargas de trabajo, de tal modo que, desde la perspectiva de la víctima, el acceso a la justicia y la reparación del daño se perciben fuera de su alcance.

El primer punto de contacto de la víctima son los servicios de urgencias, ya sean médicos, de seguridad pública o de procuración de justicia, generalmente se lleva a cabo a través de la atención telefónica, pero la falta de información sobre los servicios profesionales e instituciones que atienden a las víctimas ocasiona que estas se vean insertas en un laberinto de dependencias, trámites y esperas, que tiene como consecuencia una victimización secundaria que genera desconfianza, y a su vez, ocasiona que opten por no dar parte a las autoridades.

De igual forma, en el desarrollo de la averiguación previa o a través del proceso penal, a la víctima se le da el trato de un tercero ajeno al problema, o es considerado como un impertinente por parte de los servidores públicos por lo que es común que se les niegue la información o que no se le permita intervenir en el desarrollo del procedimiento y, en consecuencia, termina por convertirse en un simple espectador, lo cual deriva de la falta de coordinación de las autoridades, así como la ausencia de un marco jurídico suficiente en la materia, a lo que debe sumarse que la tutela de las víctimas no sea regular y, por tanto, resulte ineficaz.

De igual manera, se debe propiciar en las autoridades una conciencia activa y un compromiso gubernamental en la promoción de los derechos de las víctimas, así como la abstención de conductas que anulen sus derechos o generen una nueva victimización.

Por otra parte, los problemas que generan el delito y el abuso de poder no terminan con la afectación directa a la víctima, sino que además se extiende indirectamente a terceros: la familia, los testigos, los peritos, los abogados y demás personas o servidores públicos que le presten ayuda.

Por ello, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su compromiso con la sociedad mexicana, busca, que las víctimas reciban la atención debida, hecho que se traduce no solamente en redimensionar su posición como un sector altamente vulnerable, sino que también se señale cuáles son los derechos

SIN TEXTO



fundamentales que el Estado, en su calidad de garante, se encuentra obligado a proteger, y las directrices que debe seguir para satisfacer sus necesidades, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS

En la actualidad, se consideran víctimas en sentido amplio a las personas que, individual o colectivamente, han sufrido un daño, que bien pueden ser lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo de sus derechos fundamentales, y que son consecuencia de comportamientos derivados de la violación de una norma prohibitiva (actos) o de un mandamiento legal (omisiones) que constituyen violaciones a las leyes penales nacionales o de normas relacionadas a los derechos humanos que son internacionalmente reconocidas.

En nuestro país, se encuentran expresamente señalados los derechos de la víctima u ofendido en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son: recibir asesoría jurídica, ser informada de los derechos que en su favor establece la Constitución y del desarrollo del procedimiento penal, coadyuvar con el Ministerio Público, y que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes; así mismo, tiene derecho a recibir, a partir de la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.

De igual manera, tiene derecho a que se le repare el daño, y en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitarla y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. También, se reconoce en favor de las víctimas, que la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño, y a solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio, y en el caso de que se trate de menores de edad, éstos no estarán obligados a carearse con el inculpado en caso de los delitos de violación o secuestro.

Asimismo, el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 141, refiere los derechos de las víctimas u ofendidos del delito en el procedimiento penal y retoma los derechos constitucionalmente reconocidos; por su parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4o., inciso C), establece

SIN TEND



PODER JUDICI
PRIMA CORTE
SECRETAR
PR

las obligaciones del Ministerio Público Federal en materia de víctimas y ofendidos por algún delito.

La Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, expedida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1985, reconoce la necesidad de tomar medidas más eficaces, en los planos internacional, regional y nacional, en favor de las víctimas de delitos y del abuso de poder, quienes frecuentemente, junto con sus familias, los testigos y otras personas que les prestan ayuda, están expuestos injustamente a pérdidas, daños o perjuicios, y que además pueden enfrentar dificultades cuando comparezcan en el enjuiciamiento de los delincuentes. Por ello es necesario que se adopten medidas a fin de garantizar el reconocimiento y el respeto efectivos de los derechos de las víctimas de delitos y del abuso de poder.

Posteriormente, el Consejo Económico y Social de la ONU, en su resolución 1990/22, de 22 de mayo de 1990, reconoció la necesidad de realizar esfuerzos continuados para dar efecto a la Declaración y adaptarla a las diversas necesidades y circunstancias de los diferentes países, para lo cual creó el Plan de Acción Integrado sobre las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, que es un proyecto modelo para el establecimiento de servicios a las víctimas en un contexto de desarrollo sostenido, en el que se establece que los países tienen la obligación de definir las políticas, estrategias y acciones a través de las cuales van a implementar la Declaración.

El Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, mediante la lucha contra la impunidad, de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, expedido en 1997, considera necesario adoptar las medidas eficaces para luchar contra la impunidad, y para que en interés de las víctimas de violaciones a los derechos humanos se aseguren: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener la reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad.

OBSERVACIONES

A partir del análisis de los antecedentes referidos en el presente documento y su vinculación lógico-jurídica, esta Comisión Nacional llegó a las siguientes consideraciones:

A. Esta Comisión Nacional observa con preocupación que la atención que se otorga a las víctimas u ofendidos por el delito, cuando acuden al Ministerio Público a denunciar, suele ocasionar una victimización institucional considerada aún más

SIN TEXTO



negativa, porque es el propio sistema el que agravia a quién se dirige a él pidiendo justicia, y resulta que no sólo debe enfrentar la víctima las consecuencias derivadas del delito, sino que, en algunos casos, acompañando a éste se producen otra serie de acontecimientos que derivan de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal.

Durante el periodo del 1 de enero de 2000 al 28 de febrero de 2006, las comisiones y procuradurías de derechos humanos de las entidades federativas reportaron una cifra de 33,281, hechos violatorios, relacionados con las víctimas de delitos, por lo que toca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo del 1 de enero de 2000 al 12 de febrero de 2007, calificó un total de 9,615 hechos violatorios, relacionados con actos u omisiones en el debido funcionamiento de la administración pública, denegación de justicia, dilación en la procuración de justicia, dilación o negligencia administrativa en el proceso, insuficiente protección de las personas, intimidación, irregular integración de la averiguación previa, negativa de asistencia a víctimas de delitos, negativa de reparación del daño por parte del estado, no aceptación de la denuncia por maltrato presentado por mujeres, no aceptación de la denuncia por violación a la mujer, no consignación de la averiguación previa, omisión de la imposición de sanción legal y prestación indebida del servicio público.

Esta Comisión Nacional observa que, aun cuando se han realizado adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a los derechos de las víctimas, el marco jurídico es limitado todavía, porque no se le reconoce el carácter de víctima a todo aquél afectado por el delito, a quienes podrían ser los testigos o a las personas que hayan intervenido en su auxilio.

Ante esta circunstancia, los testigos y terceros que auxilian a las víctimas, quienes debieran ser protegidos por disposición de la ley, así como ellas mismas, cuando reciben amenazas o agresiones que ponen en riesgo su integridad y no reciben el apoyo debido, prefieren desistir y no denunciar; pierden interés en el proceso penal, por el trato que reciben de algunos servidores públicos que tienen contacto con ellos, o ante las amenazas o represalias por parte de los delincuentes.

Ante la falta de desarrollo adecuado de la norma constitucional, a través de la legislación secundaria, para facilitar la intervención de la víctima en la investigación de los delitos, el Ministerio Público sigue teniendo, en los hechos, una amplia discrecionalidad para la integración de las averiguaciones, lo cual origina que la gran mayoría de ellas terminen en el no ejercicio de la acción penal o en la "reserva", lo que implica su posterior archivo por no existir elementos probatorios para su perfeccionamiento y consignación ante un tribunal.

SIN TEXTO



Si bien es cierto que se le reconoce a las víctimas el derecho de impugnar ante el propio órgano de procuración de justicia o ante el Poder Judicial Federal, a través del juicio de amparo, las determinaciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal o desistimiento de ésta, también lo es que no se les dota a las víctimas de los medios para hacer efectivo este derecho, toda vez que es común que carezcan de recursos económicos necesarios para que un abogado particular los asesore debidamente en la elaboración del escrito de recurso interno o del amparo, así como el que alguna institución les asigne un asesor jurídico gratuito para ello.

Adicionalmente, en materia de amparo se autoriza a las víctimas a promover juicio de garantías en contra de actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil, o de aquellos surgidos dentro del procedimiento penal relacionados con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; sin embargo, no se debe olvidar que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y que es una cuestión accesoria a la determinación de la culpabilidad del procesado, lo que implica que de dictarse un incidente de libertad por falta de elementos para procesar, por desvanecimiento de datos o bien por una sentencia absolutoria, no procedería el juicio de amparo, lo cual no resulta congruente con la idea de protección establecida por el constituyente, cuando adicionó el apartado B al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el delito también tiene consecuencias psicológicas, ya que usualmente es percibido como un acontecimiento más grave que un accidente o una desgracia, cuando se enfrentan pérdidas y lesiones ocasionadas por el acto deliberado de otro ser humano.

La reacción inicial puede ser de alto impacto (shock), miedo, enojo, desamparo, incredulidad y culpa. Tales reacciones, al igual que las físicas, suceden inmediatamente después del delito, y algunas de éstas pueden volver a ocurrir con posterioridad al presentar la denuncia, asistir al juicio o acudir al hospital para buscar atención médica. Estas reacciones iniciales pueden ser seguidas por periodos de desorganización, que se manifiestan a través de pensamientos penosos sobre el evento, pesadillas, depresión, culpa, miedo y una pérdida de confianza y autoestima. Puede parecer que la vida se torna más lenta y pierde su sentido; la fe y las creencias previas pueden ya no brindar consuelo, las respuestas de conducta pueden también inducir al abuso de alcohol o sustancias adictivas, así como la fragmentación de las relaciones sociales y evadir a personas y situaciones asociadas al delito o incurrir en aislamiento social.

SIN TEXTO



Actualmente, la atención psicológica se encuentra incorporada como un derecho que tiene la víctima, pero ante la falta de infraestructura, insuficiencia de recursos humanos capacitados o la falta de coordinación entre instancias de seguridad social para brindar los servicios terapéuticos, no se realiza en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país.

Lo anterior se explica en atención a que los derechos de las víctimas no han tenido un desarrollo uniforme en las entidades federativas, ya que mientras que Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas expidieron leyes especiales en esta materia; Baja California sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, Tlaxcala y Veracruz solo han realizado modificaciones mínimas a los códigos de procedimientos penales, y respecto a estos ordenamientos, con excepción del Distrito Federal, las otras entidades federativas cuentan con normas de procedimiento que no facilitan el ejercicio pleno de los derechos de este grupo de personas. Además, la reparación de daños y perjuicios continúa como deuda no saldada a las víctimas, por la carencia de mecanismos jurídicos que faciliten su cumplimiento en el patrimonio de los responsables o a través de su trabajo en las prisiones; incluso, en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se adoptó el compromiso de fijar procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño, sin que hasta la fecha se hayan realizado las modificaciones legales conducentes.

Contrariamente a ello se han detectado prácticas administrativas que vulneran los derechos de las víctimas y producen la victimización institucional, entre las cuales se encuentran:

1. Primer contacto con las víctimas

Esta Comisión Nacional ha observado que al ocurrir un hecho delictivo, generalmente el primer contacto de la víctima suele ser con alguno de sus familiares, un vecino o una persona ajena que se encuentre cerca de donde sucedieron los hechos, y que éste le brinde auxilio; posteriormente, se da la intervención de servidores públicos de la policía preventiva o ministerial que atiende el llamado de apoyo; sin embargo, éstos no siempre están capacitados para orientar sobre los lugares que otorgan atención especializada, mucho menos para enfrentar una crisis emocional derivada del evento traumático, con objeto de que se tranquilice y pueda proporcionar datos de identificación del probable responsable o haga un

SIN TEND



DER JU
PREMA C
SECRE

relato lo más cercano posible al hecho ocurrido, o para sugerirle a la víctima la forma de conservar los objetos o los indicios del delito.

2. Atención médica de urgencia

...

3. Acceso a la justicia

a. Tiempos de espera y de recepción de la denuncia

Hoy en día, en términos generales, sigue siendo un obstáculo el tiempo de espera que la víctima, dependiendo del delito de que se trate, debe esperar horas o días para ser atendida, por ello en algunos casos las hace desistir de presentar la denuncia.

Además, en ocasiones, el representante social se niega a iniciar la averiguación previa el mismo día en que se presenta la víctima, excusándose de su deber, con argumentos tales como: falta de identificación oficial, por no contar con testigos presenciales de los hechos, por no haber transporte para realizar la inspección ocular en determinados delitos como el robo, despojo o daño en los bienes, o porque, tratándose de delitos que atentan contra la integridad corporal, no cuentan con médico legista y remiten a la víctima a un hospital público para que le hagan una certificación médica y después regresen a fin de iniciar la averiguación.

De igual manera, se presentan situaciones en las que el Ministerio Público, sin explicar el alcance del documento a las víctimas, elabora "actas circunstanciadas", de "hechos", cuyo único efecto es tener un registro de los ofendidos y los hechos, lo que obliga a éstos a insistir para solicitar un trámite adecuado a la denuncia que permita iniciar una averiguación previa.

b. Trabajo de investigación del delito en la averiguación previa.

No obstante que ésta es la etapa medular en la fase de procuración de justicia, porque de ella depende el ejercicio de la acción penal en contra del probable responsable, o bien para ubicarlo y lograr la solicitud de la reparación del daño, existen prácticas administrativas por parte del Ministerio Público que afectan a las víctimas o a la investigación misma, lo cual redundará en el envío a la reserva de las averiguaciones o en la determinación del no ejercicio de la acción penal; y entre otras, las deficiencias en el trámite de la indagatoria, la corrupción, las declaraciones iniciales incompletas de las víctimas; no se brinda una asesoría jurídica oportuna, lo cual anula los beneficios de la coadyuvancia y propicia que las víctimas acudan en diversas ocasiones para llevar a cabo alguna actuación; así mismo, hay insuficiencia de medios materiales y humanos para realizar la investigación, y en los delitos de

SIN TEXTO



querella no siempre se le explica a las víctimas el alcance del otorgamiento del perdón; hay rechazo de diligencias sin fundar ni motivar su negativa; omiten brindar a las víctimas, familiares o testigos el auxilio oportuno y efectivo para garantizar su seguridad; falta de control y supervisión de la integración de las averiguaciones, lo que ocasiona dilación, y la atención psicológica es deficiente y además persiste el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión.

c. Proceso penal

En el proceso penal se ha generado una confusión, en cuanto a los derechos de las víctimas y las del indiciado, por considerar que ellos entran en conflicto y que unos tienen más peso que otros, lo cual origina a menudo que se tomen decisiones que victimizan nuevamente a una persona. Por ejemplo, en delitos de materia sexual, en los que la víctima es menor de edad, en aras de "respetar el derecho de defensa del procesado" se cita a los padres de la víctima y a ésta, para que se presenten a fin de desahogar diligencias de ampliación de declaración, inspección judicial o pruebas psicológicas, pero sí resultan perjudiciales para el estado emocional de la víctima, con mayor razón si está siendo sometida a psicoterapia, circunstancia que se puede corroborar con el especialista que la atiende y con el expediente clínico.

Además, se observa que los juzgados penales no cuentan con instalaciones adecuadas para la estancia de las víctimas antes del desarrollo de las diligencias, y las condiciones actuales son muy proclives a que los inculcados, cuando gozan de la libertad caucional, o sus familiares intimiden o amenacen a las víctimas en los recintos judiciales.

También, es muy factible que en el proceso penal se genere una victimización secundaria a los agraviados, básicamente en delitos graves, ante la falta de personal capacitado en relación con el estrés postraumático generado por el hecho delictivo, el cual se incrementa cuando participan en diligencias judiciales que les hacen revivir los eventos traumáticos; y hay casos en los que tienen que soportar el asedio, las intimidaciones y preguntas insidiosas de la defensa del inculcado.

En este sentido, los agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados penales no siempre asumen adecuadamente la defensa de los derechos de las víctimas, ya que en ocasiones hacen acto de presencia en la diligencia judicial y simultáneamente están atendiendo otras cosas; igualmente, se presentan casos en que no se apela la sentencia y no se le explica a la víctima que puede hacerlo, no obstante que ello es un imperativo legal.

SIN TEXTO



B. Por otra parte, no escapa del conocimiento de esta Comisión Nacional que los gobiernos, tanto federal como estatales, así como algunos municipales, han tratado de establecer los servicios de atención a víctimas, cuyo objeto es brindarles asistencia y apoyo; sin embargo, ésta adolece de una articulación adecuada y de estandarización.

En este sentido, si bien es cierto que la mayoría de las entidades federativas han establecido áreas especializadas para la atención de las víctimas, principalmente al interior de las procuradurías de justicia, también lo es que no en todos los casos se ha otorgado la misma importancia al tema, ni el presupuesto es suficiente para proporcionar a las víctimas los servicios que requieren bajo los criterios de cobertura, inmediatez y suficiencia.

Del análisis al marco jurídico existente, y con objeto de incrementar las acciones para mejorar la atención a las víctimas de delitos y del abuso de poder en México, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera necesario y oportuno que se adopten las reformas legislativas y administrativas necesarias para proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de las víctimas, ya que deben constituir un referente ético y jurídico que se sustente en los postulados consagrados en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, como eje rector para el establecimiento e impulso de una "Atención Integral a las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder en México".

1.- Respeto a su dignidad

Todas las víctimas de delitos y del abuso del poder, son seres humanos que tienen derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y el respeto a su dignidad personal, y que está plasmado en la universalidad de los derechos humanos. El Estado mexicano debe propiciar el fortalecimiento de los medios para garantizar su protección efectiva, a recibir un trato justo y equitativo, sin distinción alguna, ya sea por su raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, impedimento físico o de otra índole. Las víctimas de cualquier delito deben ser tratadas por los servidores públicos con la debida atención y respeto, y éstos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio que presten, abuso o ejercicio indebido de la autoridad.

SIN TEXTO



2. El personal

Aquél que atienda a las víctimas deberá estar integrado por un equipo técnico interdisciplinario, especializado y profesional, conformado preferentemente por abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y prestadores de servicio social, el cual será seleccionado conforme a un perfil orientado a la atención victimológica. Así mismo, sería recomendable impulsar proyectos de inducción, entrenamiento, capacitación y actualización, tanto para el personal interno como para el personal de otras instituciones, además de promover espacios de protección y fortalecimiento emocional que faciliten la atención a las víctimas, con la finalidad de prevenir el desgaste profesional de dicho personal.

A fin de mejorar los servicios que se proporcionen será necesario fomentar el diseño de técnicas de selección del personal de atención a víctimas, y de los perfiles condicionados con características psicológicas que garanticen la estabilidad emocional, sensibilidad y capacidad de empatía y probidad, entre otras, así como en los conocimientos especializados en la materia. Así mismo, se deberá promover, en el ámbito de la colaboración institucional, el establecimiento de programas interdisciplinarios permanentes de capacitación del personal de atención a víctimas, particularmente del que se desempeña en la policía, el sistema de procuración de justicia, la administración de justicia, los hospitales y en los centros de atención psicológica y psiquiátrica, entre otros.

3. Atención integral a la víctima

El Estado mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, debe impulsar las medidas necesarias para que se reconozcan, con base en los principios y estándares internacionalmente aceptados, así como en los preceptos que establece el apartado B, del artículo 20 constitucional, al menos los siguientes derechos a las víctimas de delitos y del abuso de poder:

- a) Recibir la atención integral y especializada que necesiten para el tratamiento eficaz en contra de los efectos causados por el hecho delictivo o el abuso de poder con plena observancia y respeto de sus derechos humanos;
- b) Acceder a los sistemas de Justicia, Salud y Asistencia Social;
- c) Estar informadas oportunamente de los derechos que establece a su favor el orden jurídico mexicano, así como de sus alcances y medios para hacerlos valer;

**SIN
TEXTO**



d) Ser acompañadas y contar con un asesor jurídico, cuando ello se requiera, ante las instancias de procuración e impartición de justicia para que defiendan sus intereses;

e) A ser canalizadas a las instituciones idóneas para recibir una atención que permita su restablecimiento;

f) A la reparación del daño cuando éste proceda, en los términos más amplios y eficaces, debiendo ser a cargo del Estado cuando el autor del delito sea un servidor público, y

g) A recibir asistencia a cargo del Estado cuando proceda, en función de los fondos de ayuda y apoyo creados expresamente para tal fin.

En la elaboración de programas de cobertura municipal, estatal, regional o nacional, deberán uniformarse los procedimientos de atención, bajo el principio de que las víctimas serán tratadas con respeto total a su dignidad, y recibirán la asistencia jurídica, médica, psicológica y social que sea necesaria, salvaguardando en todo momento sus derechos humanos por medio de servicios especializados, los cuales serán regidos bajo los postulados de oportunidad, calidad idónea, responsabilidad ética, sencillez, gratuidad, confidencialidad y contacto directo con las autoridades o instancias respectivas, para dar respuesta inmediata a las situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

a. Atención médica

Las víctimas, cuando las circunstancias del caso lo requieran, deberán recibir servicios gratuitos de atención médica de urgencia, ser atendidas o canalizadas inmediatamente a los centros médicos y hospitalarios más cercanos e idóneos, y ser acompañadas por el personal que presta los servicios victimológicos para verificar que los servidores públicos de las instituciones de salud les proporcionen la atención que corresponda con el mayor profesionalismo posible, y también para que tome las medidas adecuadas para garantizar su integridad física y se documente cuidadosamente la condición en que las víctimas llegaron y prestarle atención especial a sus necesidades. Así mismo, han de contar con números telefónicos y direcciones de los servicios de emergencia en cada localidad.

SIN TEXTO



PODER JUI
SUPREMA CC
SECRET

b. Atención psicológica

Es importante proporcionar servicios de primeros auxilios psicológicos en la etapa de crisis, mediante el apoyo psicoterapéutico (individual o grupal), para que las víctimas que lo requieran puedan afrontar el evento traumático del delito, así como sus efectos emocionales y la respuesta social, a fin de proteger, adaptar y mantener la salud mental, y para que recuperen la funcionalidad disminuida o perdida, mediante el tratamiento de rehabilitación correspondiente.

c. Personalización de la asistencia

En concordancia con lo antes expuesto, deberá prevalecer el criterio de personalización de la asistencia que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del hecho, se adecue al caso en cuestión y escape a la generalización de la ayuda brindada. Para ello se debe conformar un equipo de profesionales de diferentes disciplinas, con sensibilidad social y espíritu de servicio, que orienten su trabajo principalmente a personas de escasos recursos y en situación de indefensión.

d. Los programas de atención

Estos deberán contemplar varias posibilidades para que las víctimas tengan acceso inmediato a servicios integrales, ya sea que de manera personal acudan a las áreas expresamente instrumentadas para tal efecto, la cuales deberán estar ubicadas preferentemente en lugares de fácil acceso a las vías de comunicación y cercanas a otros centros de atención, tales como hospitales, enfermerías, agencias de Ministerio Público, estaciones de policía o de seguridad pública, estancias infantiles, albergues, entre otras, para su respectiva canalización.

Si el contacto es por teléfono, los servicios se deben prestar en tiempo real, por medio de números gratuitos y de larga distancia y se debe contar con líneas adicionales y suficientes que permitan un fácil contacto. Además, se deberá crear en el espacio cibernético (Internet) un vínculo entre las instituciones que presten servicios de atención a víctimas en la región que corresponda, con el objetivo primordial de proporcionar la información que permita el acceso inmediato a los servicios victimológicos, como conducto para la promoción y divulgación de los mismos, que permita a las víctimas, que no puedan tener contacto inmediato con el programa u otros centros de atención victimológica, acceder a los servicios por medio de las visitas de campo, para lo cual resulta fundamental el integrar brigadas preferentemente asistidas por abogados y psicólogos.

SIN TEXTO

ESTADOS
PODER JU
SUPREMA
SECRE

4. Orientación jurídica

Es fundamental dar a conocer a las víctimas los derechos que a su favor prevé el orden jurídico mexicano, primordialmente en materia de procuración e impartición de justicia, de manera pronta, completa e imparcial, así como las acciones, procedimientos, recursos e instancias legales para hacerlos valer, las formas de ejercitarlos y sus alcances, con el objetivo de que sean escuchadas en los procedimientos judiciales o administrativos, y que las opiniones que emita al respecto sean presentadas y examinadas en las etapas apropiadas.

Para ello se deberán adoptar las medidas conducentes que minimicen las molestias causadas, que protejan su integridad y garanticen, tanto su seguridad como la de sus familiares, la de los testigos en su favor o quien le preste apoyo, contra todo acto de intimidación y represalia, y que aseguren su identidad; todo con el propósito primordial de prevenir o en su caso disminuir la victimización secundaria derivada de las imprudentes o inapropiadas prácticas administrativas que lleven a cabo los servidores públicos, así como a garantizar el derecho:

a) A presentar su denuncia o querrela ante el agente del Ministerio Público, ya sea del orden federal o local, y a que se inicien los trámites correspondientes;

b) A que se les procure justicia de una manera pronta, completa e imparcial;

c) A que el Ministerio Público y sus auxiliares les proporcionen servicios victimológicos en el marco de la legalidad, con honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y diligencia, quienes deberán abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de la atención, abuso o ejercicio indebido de la autoridad, pero sobre todo, deberán tratar a las víctimas con respeto a su dignidad;

d) A ser informadas por parte del Ministerio Público de los derechos que les reconoce la Constitución y las leyes aplicables, así como a ser oportuna y debidamente enteradas sobre el desarrollo del procedimiento penal, sus alcances y contenidos, y que se deje constancia en el expediente de ésta atención;

e) A recibir orientación jurídica por parte del Ministerio Público sobre la forma y modo para hacer valer sus derechos, quien deberá encauzarlas o canalizarlas hacia las instancias y autoridades competentes para recibir la debida atención victimológica;

**SIN
TEXTO**



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SECRETARÍA
PROCURADURÍA

f) A coadyuvar con el Ministerio Público, aportando todas las pruebas que tenga a su alcance durante la averiguación previa y el proceso penal para que se acredite la responsabilidad del inculpado y el monto de la reparación del daño, y de no ser posible para la víctima aportar mayores elementos para la cuantificación del daño, la obligación correrá a cargo del Ministerio Público, quien deberá de apoyarse de los elementos que juzgue necesarios para llevar a cabo dicha labor.

g) A tener acceso a la averiguación previa y al expediente, para conocer sobre el desarrollo del procedimiento.

h) A estar informadas sobre todos aquellos datos que sirvan para que puedan participar activamente en la toma de decisiones concernientes a su caso, emitiendo las opiniones y las consideraciones que correspondan en las etapas procesales adecuadas, y el Ministerio Público les deberá informar y explicar sobre la trascendencia jurídica del perdón;

i) A exigir que el Ministerio Público solicite la reparación del daño cuando éste proceda y, además, durante la averiguación previa, practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes para la acreditación de su monto, y en la etapa de sentencia, si el sentenciado se niega a cubrir el pago respectivo, deberá solicitarle al juez que remita copia certificada de la resolución a la autoridad fiscal competente para que dicha sanción se haga efectiva mediante el procedimiento económico coactivo;

j) A la restitución del objeto del delito;

k) A proponer el embargo precautorio sobre los bienes del delincuente;

l) A comparecer activamente en los actos del juicio, y a que el Ministerio Público guarde confidencialidad respecto los datos que permitan su localización por parte del probable responsable del delito u otros datos que afecten la reputación, el honor y el buen nombre de la víctima;

m) A que el Ministerio Público solicite las medidas necesarias para proteger la integridad de la víctima o de sus familiares y testigos de las agresiones que el inculpado o las personas cercanas a éste puedan cometer en su contra;

n) A interponer recursos y promover juicios de amparo;

EXHIBITO
Nº 1



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL

o) A gozar de un traductor o intérprete cuando la víctima no hable o entienda el español, y en caso de que la víctima tenga una condición especial de vulnerabilidad, el Ministerio Público deberá solicitar las medidas necesarias para garantizar la protección de sus intereses;

p) A promover la acumulación de procesos, y el desahogo de todas aquellas diligencias inherentes a las actuaciones procesales;

q) A impugnar el no ejercicio o desistimiento de la acción penal;

r) A recibir atención especial y personalizada en el caso de delitos en materia sexual y de secuestro, con objeto de garantizar la integridad física y emocional de la víctima, y en caso de que el inculcado solicite ser careado con la víctima y ésta sea menor de edad, deberá informarse a su representante legal el derecho que tiene ella de no ser obligada a someterse al careo, y formulará ante el juez la oposición correspondiente, solicitándole que se lleven a cabo las declaraciones en las condiciones que establezca la ley;

s) A recibir atención en su domicilio, cuando por algún impedimento físico o mental no pueda acudir a la institución responsable de brindarle la atención requerida, y de propiciar que dicho apoyo continúe de manera posterior a la sentencia del caso, ya que deberá abarcar también el tiempo por el que se extienden todos los daños sufridos por la víctima.

5. Acompañamiento

La atención integral a las víctimas deberá incluir tareas de acompañamiento por parte de un servidor público o promotor de sus derechos, en las denuncias, comparecencias, declaraciones, inspecciones, y en general en cualquier tipo de actuación relacionada con su caso cuando se requiera; ello para evitar que la víctima se sienta desprotegida y desinformada, y con mayor confianza se acerque a las instituciones de justicia, salud o cualquiera otra dependencia pública o privada encargada de atender su asunto.

6. Reparación del daño

La atención a las víctimas del delito y del abuso de poder deberá permitir que éstas tengan acceso a los mecanismos jurídicos necesarios para elegir el tipo de reparación del daño más acorde para restituirlo en el goce de sus derechos, por parte de los particulares o del Estado, cuando ésta proceda. Para tal efecto es necesario impulsar las acciones ante los poderes públicos para que este derecho se

SIN TEXTO



298

cumpla cabalmente en todo el país, a través de la generación de reformas legislativas y la gestión de fondos de compensación o de apoyo, que las ayuden a una pronta reparación a fin de lograr el pleno resarcimiento, reintegración y recuperación por el daño sufrido.

Para los efectos de la reparación del daño, cuando la víctima del delito haya fallecido o padezca lesiones que impliquen pérdida o disminución de sus facultades físicas o mentales, deberán considerarse como ofendidos al cónyuge, al concubino, y demás ascendientes o descendientes que dependan económicamente de éste.

Al momento de calcular la reparación por el daño causado, es necesario tener en cuenta la situación financiera de la víctima para evitar excesos y deficiencias. Para esto, se puede considerar necesario apreciar cada una de las necesidades de la víctima, incluyendo también su capacidad a hacer frente al daño financiero que le ha causado el delito.

En este contexto, y en el caso de violaciones por abuso de poder en las que el sujeto activo sea el Estado, la reparación del daño deberá satisfacerse conforme a los principios internacionales que rigen la materia, atendiendo al daño material, daño moral y a los perjuicios ocasionados.

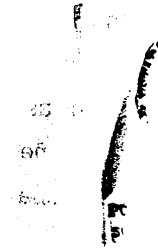
7. Servicios funerarios

La asistencia social que se les brinda a los familiares de la víctima fallecida, cuando ante la escasez de recursos, no están en condiciones de sepultar a sus familiares, debe orientarse a superar de manera más sencilla este obstáculo mediante acciones orientadas a proveerles las facilidades para ello, ya sean económicas o de tramitación.

8. Identificación

Para proporcionar una atención de amplia cobertura, es fundamental, primero, determinar los índices y tipos de victimización existentes en el país o en cada entidad federativa, por medio de los datos que se obtengan de informes y encuestas que permitan una estimación probable de los costos que tendrían los servicios a instrumentar. Posteriormente, habría que identificar los servicios victimológicos disponibles, así como las necesidades de las víctimas y el tipo de ayuda que requieren, a fin de obtener una visión concreta de las medidas que se van a adoptar y evitar así la duplicidad.

SIN TEXTO



9. Promoción

Se deberán coordinar los eventos de promoción de los derechos de las víctimas, tales como congresos, seminarios, reuniones, mesas redondas, simposios, cursos de actualización y diplomados, entre otros, que permitan el estudio del fenómeno victimológico, las consecuencias que genera y los mecanismos de atención, que son fundamentales para una mejor promoción y educación, y que servirán para crear un código de ética para los servidores públicos. Las estrategias de esta promoción deberán ser dirigidas con gran cuidado a la población en riesgo. Así mismo, se deben publicitar los propósitos fijados mediante la difusión amplia de los servicios de las unidades de asistencia a víctimas de delitos, de la captación de casos dentro y fuera del Ministerio Público, de la respuesta directa y en red sobre necesidades de atención a las víctimas, y sobre el seguimiento de los casos y la evaluación del impacto y desempeño de su trabajo.

Para ello se considera conveniente promover convenios de colaboración para la elaboración de una estrategia de promoción y divulgación que informe, oriente, sensibilice e informe a la sociedad sobre el fenómeno victimológico, con respecto a los derechos de las víctimas, de las instituciones responsables de hacerlos valer y los medios legales para hacerlos exigibles, y en su caso saber cuáles son las instancias competentes a las que pueden acudir para que las oriente, asesore, acompañe y asista en esa tarea, para así disminuir el impacto de la victimización y crear una conciencia de solidaridad social, tanto en los servicios públicos encargados de la atención, como en la sociedad en general, y para mejorar la percepción ciudadana sobre la imagen de los servicios victimológicos y de justicia y fomentar la denuncia de hechos delictivos.

10. Coordinación y participación ciudadana.

Resulta de particular importancia la necesidad de dar reconocimiento, a través de la ley, a las diversas asociaciones independientes y darles una participación más activa en la tarea de dar rehabilitación a las víctimas de delitos. Sería deseable que las autoridades estatales y municipales pudieran celebrar acuerdos y convenios administrativos, mediante los cuales se establecieran los mecanismos de coordinación, colaboración y concertación que permitan la participación de los sectores público, social y privado en materia de atención y protección a víctimas de delitos.

SIN TEXTO

PODER JI
SINMA
SECRET
ESTADO

C

C

C

C